



EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁFRICA: LA INDUSTRIA EXTRACTIVA HIDROCARBUROS Y MINERALES

Informe elaborado por:

Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional (ReSeT)
para REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)

Autor:

Jesús García-Luengos

Coordinación y edición de textos:

Marta Burgo Arregui

Diseño y maquetación:

Pablo Silva Fernández

Coordinación editorial:

Antonio Tejedor Mingo

Fotografías:

REDES, SED

Imprime:

Grupo Edelvives Talleres Gráfico

10 de enero de 2014

Índice

Resumen ejecutivo.....	5
1. Introducción.....	10
2. Breves apuntes históricos.....	13
3. Contexto actual	14
3.1. Crecimiento versus desarrollo humano sostenible	17
3.2. Dinámicas de exploración y explotación al alza.....	22
3.3. Recursos naturales, seguridad y desarrollo: el Sahel y el Golfo de Guinea.....	24
4. ¿Cómo se explotan los minerales e hidrocarburos y a quién benefician?.....	27
5. ¿Qué efectos e impactos sociales y medio ambientales están teniendo lugar?.....	34
5.1. Impactos sociales.....	34
5.2. Impactos sobre la salud y el medio ambiente.....	37
6. Vinculaciones entre los lugares de explotación y consumo.....	39
7. Apuntes sobre España y su presencia en África subsahariana.....	42
8. ¿Qué medidas se están adoptando para mejorar la gestión de los recursos naturales?	44
9. Lecciones aprendidas.....	47
10. Buenas prácticas.....	48
11. Orientaciones en el caso de España.....	51
12. Conclusiones.....	52

ANEXOS - Estudios de caso

I. Estudios de caso Guinea Ecuatorial: el poder del petróleo	56
II. Estudios de caso Angola: petróleo para la élite en un escenario post-conflicto	58
III. Estudios de caso Ghana: la esperanza de que el petróleo beneficie a la población	62
Bibliografía.....	64



ACRÓNIMOS

AIE: Agencia Internacional de Energía.

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.

BM: Banco Mundial.

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

CEDEAO: Comunidad Económica de África Occidental.

CONGDE: Coordinadora de ONG para el Desarrollo Estatal.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

IFI: Instituciones Financieras Internacionales.

ITIE: Iniciativa sobre la Transparencia en las Industrias Extractivas.

FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

FONPRODE: Fondo de Promoción para el Desarrollo.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.

PIB: Producto Interior Bruto.

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

REDES: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario.

RDC: República Democrática del Congo.

RRNN: Recursos Naturales.

UNEP: Programa sobre Medioambiente de Naciones Unidas.

Resumen ejecutivo

Existe una oportunidad histórica para que en África Subsahariana se inicie una senda de progreso y bienestar para el conjunto de sus 900 millones de personas, un 50% de ellas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, parece muy probable que persistan las dinámicas de explotación y acaparamiento de las rentas generadas por los recursos minerales e hidrocarburos, en detrimento de las poblaciones locales. Todo depende, en gran parte y de forma prioritaria, de los dirigentes africanos y de las multinacionales extranjeras del sector minero e hidrocarburos que operan en dicha región; así como de los gobiernos que respaldan a estas últimas. El papel de las instituciones financieras internacionales, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil, tanto local como internacional, tiene también un peso específico.

En el caso de la África Subsahariana, unos 30 países son significativamente ricos en recursos naturales (RRNN). Se estima que África alberga un 30% de las reservas mundiales de minerales. En el caso del uranio, platino, diamantes y oro las estimaciones superan el 50%. La región cuenta además con importantes productores de petróleo, como Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial, y con un nuevo frente de yacimientos de hidrocarburos recién descubiertos en África del Este.

Este escenario contrasta con la persistencia de déficits ingentes sobre transparencia, rendición de cuentas, justicia redistributiva y servicios sociales básicos. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa a 34 países subsaharianos entre los 40 últimos países del mundo (sin incluir Sudán del Sur, del que todavía no hay datos). Ante esta situación surgen innumerables preguntas, como ¿Qué ha sucedido para que países como Sierra Leona y Chad –con un aumento del ingreso *per capita* acumulado entre 2000 y 2011 de un 82% y 79% respectivamente, y un crecimiento medio del PIB en este período del 8,9% y 8,3%– continúen, año tras año, en los últimos lugares del IDH del PNUD? o ¿Cómo es posible que en Níger, tercer productor mundial de uranio (7,5% de la producción mundial), la esperanza de vida sea de 55 años?



Las respuestas a estas cuestiones tienen un común denominador: un sistema de explotación de los recursos en beneficio exclusivo de una minoría. La explotación de los minerales e hidrocarburos está configurada por múltiples vertientes de acaparamiento, malversación y articulación de entramados empresariales ubicados en “paraísos fiscales”, que finalmente se traducen en un auténtico expolio en detrimento de las poblaciones locales, legítimas titulares de dichos recursos. Los impactos derivados de la explotación de estos recursos sobre la salud de las comunidades locales y el medio ambiente son, a su vez, muy importantes. Además, los recursos naturales siguen contribuyendo a aumentar la inestabilidad de amplias zonas en África Subsahariana, y a agravar y prolongar los conflictos. Otros recursos como los pesqueros, forestales y agrícolas –con un proceso de acaparamiento de tierras de una gran dimensión– son también sobreexplotados y esquilmos.

Contexto actual y aspectos clave sobre la gestión de los minerales e hidrocarburos

Los antecedentes históricos y la etapa de la colonización, son determinantes para entender la configuración actual en el ámbito objeto de estudio. África Subsahariana está atravesada por diversas dinámicas que parecen convivir en planos temporales diferentes. Por un lado, se ha producido el desembarco de varias potencias emergentes, con nuevas estrategias; se ha intensificado de forma exponencial tanto la actividad extractiva como el uso de nuevas tecnologías de exploración y extracción y los fondos de inversión internacionales se orientan cada vez más a la región. Por otro, la inserción de África en la globalización sigue estando basada en la exportación de materias primas sin procesar.

China, cuya política exterior en la región subsahariana está impulsada por la obtención de petróleo y minerales, lleva desde finales del siglo XX estableciendo acuerdos con todo tipo de regímenes africanos a golpe de talonario, y desarrollando infraestructuras. Su política de “no injerencia” en los asuntos internos de los países africanos encaja, por otro lado, con el perfil de las élites autócratas de varios países africanos. Otras potencias emergentes, como India, Brasil o Corea del Sur, con un peso creciente, están contribuyendo también a la referida contienda por los recursos naturales. Las potencias occidentales, con amplios intereses económicos en dicha región, no cuentan, por su parte, ni con medios ni con credibilidad suficiente para contrarrestar la referida estrategia de China.



Después de una década de crecimiento económico sostenido (con una media estimada por el Banco Mundial de un 5% del PIB). África Subsahariana presenta un panorama ambiguo. Por un lado, las economías de muchos países subsaharianos han superado de forma notable la crisis económica y financiera mundial, con tasas de crecimiento en algunos casos muy altas. De otro, sin embargo, la gran mayoría de dichos países no han conseguido mejoras en las condiciones de vida de las capas sociales más pobres y del conjunto de la población. Aquellos países que han crecido más rápido gracias a los hidrocarburos y minerales tienen ratios peores de reducción de pobreza que los que no detentan en un grado tan alto de dichos recursos. Además, en los países ricos en recursos naturales el crecimiento del PIB ha ido en paralelo al crecimiento de las desigualdades sociales.

La forma en que se ha venido gestionando y explotando los minerales e hidrocarburos subsaharianos es la que ha determinado el contexto e impactos actuales. Esta cuestión se expone en el informe a través de 10 aspectos relativos a las características de los estados ricos en hidrocarburos (*Estados rentistas*, *Estados en la sombra* y *Estados Fallidos Sostenibles*): la opacidad contractual; los "paraísos fiscales"; la corrupción y falta de transparencia; la violación de derechos fundamentales; las exportaciones de materias primas sin procesar; la falta de control de las empresas estatales y diversos déficits institucionales; los impactos negativos de los acuerdos comerciales y marcos normativos excesivamente favorables a la inversión extranjera; la competencia por los recursos y los beneficios desmedidos de las multinacionales; y la profunda incoherencia de las estrategias de seguridad energética con los objetivos de la cooperación al desarrollo internacional. Igualmente, se analizan los diversos impactos sociales y medio ambientales derivados de la explotación y el expolio de estos recursos.



Vinculaciones entre los lugares de explotación y consumo

Todas las cuestiones abordadas tienen una vinculación directa con los países occidentales, sus gobiernos, empresas y ciudadanos, así como con los de las potencias emergentes. La comprensión de este nexo y su inserción en las correspondientes decisiones y políticas públicas, y en las acciones de las sociedades civiles respectivas, es determinante si se pretende abordar con la debida coherencia y justicia social la problemática descrita.

Existe una gran dependencia de las economías occidentales (y de otros países desarrollados y, cada vez más, de las potencias emergentes) y de sus consumidores respecto a la obtención y disponibilidad de las materias primas que producen los países ricos en recursos naturales a precios asequibles. En el caso de España, la denominada "diplomacia económica" se ha traducido en un impulso comercial e inversor a favor de las empresas en la región subsahariana. En relación a los minerales, y sobre todo los hidrocarburos, la región del Golfo de Guinea reviste una importancia especial. España importa prácticamente el 100% del gas y el petróleo que consume. Las importaciones de gas y petróleo de Nigeria son muy significativas (en 2012 representaron, respectivamente, el 11 y el 14% del total).



Todo este contexto exige trascender los enfoques estrictamente económicos, comerciales y de seguridad; que se refuercen las iniciativas para promover la transparencia en las industrias extractivas y los marcos regulatorios sobre las empresas y su responsabilidad social corporativa; y que se aborden de forma coherente la problemática de los paraísos fiscales; así como la relación directa entre los patrones de consumo y los de producción.

Medidas para la mejora de la gestión de los recursos naturales

Durante los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas que tratan de mejorar la gestión de los recursos naturales, y proteger a las poblaciones locales y el medio ambiente, tanto desde el ámbito de las empresas como de las organizaciones internacionales.

A nivel regional la gran iniciativa de referencia es la *Africa Mining Vision* (2009), liderada, por primera vez por una organización regional africana, la Unión Africana (UA), bajo los auspicios también de la Comisión Económica por África de Naciones Unidas. Son también numerosas las OSC que trabajan en este ámbito, como *Global Witness*, *Revenue Watch* o *Tax Justice Network*.

Gran parte de los esfuerzos de los últimos años sobre la mejora de la gobernanza en el sector de hidrocarburos y minerales se han concentrado en la Iniciativa sobre la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE, 2002), en la que confluyen actores muy diversos. Su objetivo es promover la transparencia, tanto en relación a los pagos efectuados por las empresas extractivas como a los ingresos que obtienen los estados de aquellas. La incorporación a esta iniciativa es de carácter voluntario. De los 23 países que han conseguido la convalidación en esta iniciativa, 13 son subsaharianos. Por el momento no hay sobre la mesa resultados tangibles en términos de mejora del buen gobierno, lucha contra la corrupción o reducción de la pobreza. Tampoco existe un control sobre las formas de evasión a través de los paraísos fiscales (como los denominados "precios de transferencia"). Pese a ello, la ITIE, junto con otras iniciativas, ha propiciado que exista una información disponible valiosa, devaluando la opacidad reseñada, y ha generado espacios de reflexión y debate, lo cual es un paso importante.

La aprobación, en 2010, de la Ley de Reforma Financiera (*Dodd-Frank Act*) en EEUU supuso un auténtico revulsivo. Esta normativa exige que las compañías mineras, petroleras y gasistas que coticen en este país hagan público lo que pagan a cada uno de los gobiernos en los que operan (incluyendo los pagos por licencias de exploración y producción); y que lo hagan de forma desagregada: país por país y proyecto por proyecto. Por parte de la UE, y en línea con la normativa de EEUU, en junio de 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aprobaron el texto de las Directivas de la UE sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, con el fin de que las empresas del sector extractivo y forestal declaren anualmente todos los pagos hechos a los gobiernos –únicamente país por país– en aquellos casos en que dichos pagos superen los 100.000 €. La normativa se aplicará tanto a las empresas que coticen en las bolsas europeas como a las grandes compañías que no lo hagan. Se estima que la legislación de EEUU junto con la de la UE abarcará el 70% de la industria extractiva.

La experiencia de diversas organizaciones públicas y privadas indica claramente la necesidad de que se establezcan normas vinculantes en relación a la transparencia, rendición de cuentas, información sobre las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y responsabilidad social de las multinacionales. La creación de autoridades de seguimiento y control independiente, y de tribunales competentes y especializados en la lucha contra la corrupción es también fundamental; al igual que el refuerzo de las capacidades de la sociedad civil y de los movimientos sociales locales.

Pese a la magnitud de los retos, existen sin embargo experiencias aceptablemente exitosas en este ámbito. Además del caso de Botswana y del de Ghana, cabe destacar las medidas adoptadas por algunos países en materia de transparencia. También se han reformado algunos códigos mineros, con el fin de recabar más impuestos y reforzar la protección social de las comunidades locales y el medio ambiente. En relación a las sociedad civil y movimientos sociales hay también numerosos referentes de buenas prácticas.

En la medida en que estas buenas prácticas vayan fraguando, a partir de iniciativas, locales, nacionales, regionales e internacionales, puede haber más avances. El cambio es posible, tal y como demuestran algunos casos de buenas prácticas cuya existencia hubiese sido impensable hace pocos años. El gran reto está en ampliar, desde múltiples instancias, el foco de estos pequeños puntos de luz. De lo contrario, continuarán, en mayor o menor medida, las dinámicas de las últimas décadas, y cientos de millones de africanos y africanas, legítimos titulares de sus recursos naturales, seguirán siendo desposeídos de sus derechos más básicos.

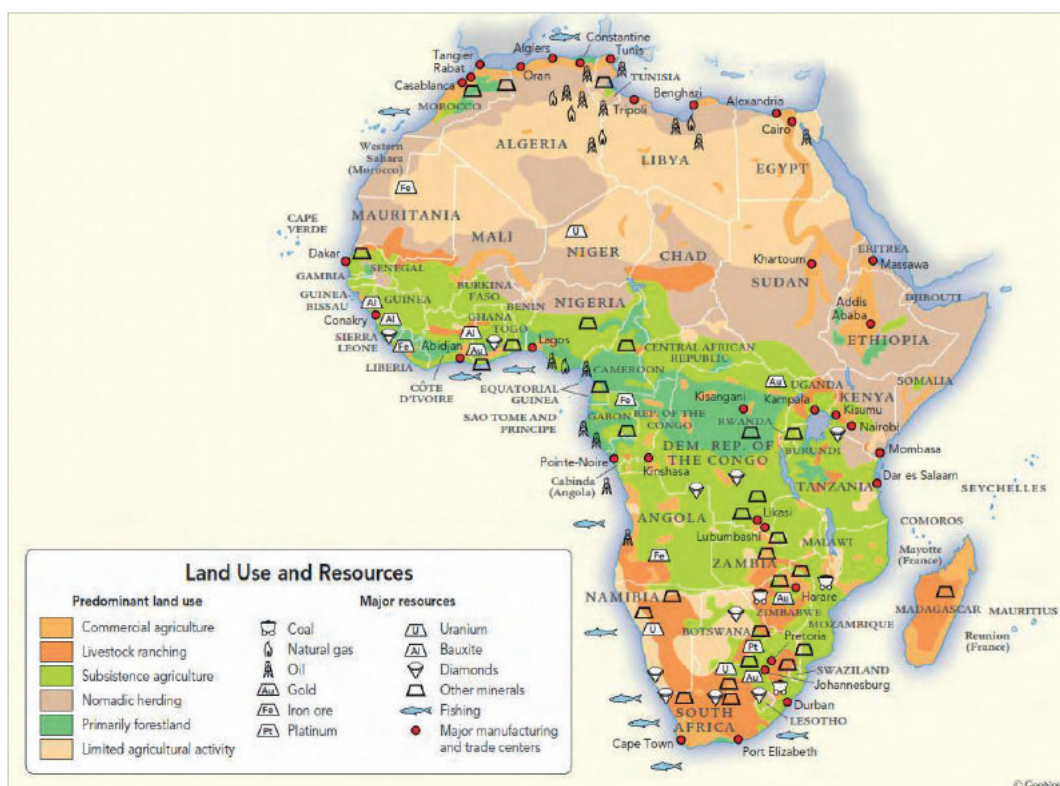


1. Introducción

Existe una oportunidad histórica para que en África Subsahariana se inicie una senda de progreso y bienestar para el conjunto de sus 900 millones de personas, un 50% de ellas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, parece muy probable que persistan las dinámicas de explotación y acaparamiento de las rentas derivadas de los recursos minerales, el gas y el petróleo, en detrimento de las poblaciones locales. Todo depende, en gran parte y de forma prioritaria, de los dirigentes africanos y de las multinacionales extranjeras del sector minero e hidrocarburos que operan en dicha región; así como de los gobiernos que respaldan a estas últimas. El papel de las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales y la sociedad civil, tanto local como internacional, tiene también un peso específico.

Algunos de los parámetros actuales de esta oportunidad histórica son el alto y sostenido crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de diversos países africanos; el ciclo alcista de los precios de sus recursos naturales durante la última década, propiciado por la fuerte demanda de China y otros mercados emergentes; las previsiones actuales de prolongación de dichos precios durante los próximos años; y una actividad exploratoria desenfrenada y las reservas de hidrocarburos recientemente descubiertas, con un nuevo frente abierto en África del Este.

En el caso de África Subsahariana, más de una veintena de países (de un total de 49) son ricos en recursos naturales¹. Se estima que África alberga un 30% de las reservas mundiales de minerales; y en el caso del uranio, platino, diamantes y oro las estimaciones superan el 50%. La cuota mundial de reservas petrolíferas de la región subsahariana es del 5% y de producción de petróleo de cerca del 8%, con una tendencia previsiblemente al alza.



¹ Se considera que un país es rico en RRNN cuando éstos representan un porcentaje significativo de sus exportaciones y de los ingresos estatales. El Fondo Monetario Internacional ha identificado en la región subsahariana 20 países con un alto nivel de riqueza en dichos recursos, especialmente minerales e hidrocarburos. Estos países –cuyo porcentaje de exportación de ambos recursos es superior al 25% y/o estos recursos representan más del 20% de los ingresos estatales– representan en conjunto el 56% de la población subsahariana y casi el 79,6% del PIB regional actual.



Este escenario contrasta con la persistencia de déficits ingentes sobre transparencia, rendición de cuentas, justicia redistributiva y servicios sociales básicos. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa a 34 países subsaharianos entre los 40 últimos países del mundo (sin incluir Sudán del Sur, del que todavía no hay datos).

En el lado positivo de la balanza, ha habido algunos avances significativos en términos macro económicos en la región subsahariana, así como algunos progresos en el ámbito del desarrollo humano sostenible, si bien son por el momento exiguos y muy por debajo del potencial existente. Además, el debate sobre la necesidad imperiosa de mejorar la gestión de los recursos naturales se ha ampliado; la cuestión de la transparencia y de los marcos normativos refleja también algunos avances; y van surgiendo algunos casos puntuales de buenas prácticas. Estas son las referencias que, si se consolidan y propagan, podrían conformar una senda positiva para aprovechar la referida oportunidad histórica.

Cabe también constatar que la mayoría de los economistas, analistas y medios de comunicación tan solo ponen el foco de atención en los mercados internacionales de materias primas –con apuntes esporádicos a la especulación, en particular en relación a los precios de los alimentos–, el crecimiento económico en términos del PIB o cuestiones sobre seguridad energética, dejando a un lado la realidad de millones de personas del África Subsahariana y otras regiones.

Las preguntas realmente cruciales siguen sin atenderse debidamente, y los ingresos de los recursos minerales y los hidrocarburos siguen sin llegar a la inmensa mayoría de las poblaciones locales. ¿En qué se traduce para un ciudadano común de Guinea Conakry que su país detente una de las primeras reservas mundiales de bauxita (con la que se fabrica el aluminio) y una gran riqueza en hierro?; ¿Cómo es posible que en Níger, tercer productor mundial de uranio (7,5% de la producción mundial), la esperanza de vida sea de 55 años?; ¿Qué ha sucedido para que países como Sierra Leona y Chad –con un aumento del ingreso *per capita* acumulado entre 2000 y 2011 de un 82% y 79% respectivamente, y un crecimiento medio del PIB en este período del 8,9% y 8,3%– continúen, año tras año, en los últimos lugares del IDH del PNUD?

Las respuestas a estas cuestiones tienen, como se explica más adelante, un común denominador: un sistema de explotación de los recursos en beneficio exclusivo de una minoría. La explotación de los minerales e hidrocarburos está configurada por múltiples vertientes de acaparamiento, malversación y articulación de entramados empresariales ubicados en “paraísos fiscales”, que finalmente se traducen en un auténtico expolio en detrimento de las poblaciones locales, legítimas titulares de dichos recursos.

Los impactos derivados de la explotación de estos recursos a nivel social y sobre la salud de las comunidades locales y el medio ambiente son muy significativos, como se expone en las líneas que siguen. Además, el acaparamiento de los recursos naturales sigue contribuyendo a aumentar la inestabilidad de amplias zonas en África Subsahariana, y a agravar y prolongar los conflictos. Otros recursos como los pesqueros, forestales y agrícolas –con un proceso de acaparamiento de tierras de una gran dimensión– son igualmente sobreexplotados y esquilados.

Junto con la problemática del cambio climático, los conflictos y las crisis humanitarias, no existe ningún otro ámbito geográfico que revista una relevancia tan primordial en términos de desarrollo humano sostenible y de seguridad humana para el conjunto del planeta.

Todas estas cuestiones conciernen no solo a los países en desarrollo ricos en recursos naturales, sino, igualmente, a los países desarrollados, a sus gobiernos, a las multinacionales y a todos los ciudadanos. Es el caso de los países europeos y de España. Esta última tiene una presencia empresarial creciente en la región, de la que importa, entre otras materias primas, minerales e hidrocarburos. Un adecuado conocimiento de este ámbito es determinante para reforzar la coherencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) internacional y, de forma más concreta, la cooperación al desarrollo española en África Subsahariana.

La relevancia de esta cuestión para las poblaciones africanas exige, por tanto, un análisis de las principales claves; la forma en que se explotan dichos recursos; cómo se gestionan sus rentas y se desvían los ingresos y plusvalías; qué actores están implicados en los diversos sectores extractivos y cómo acaparan los ingresos derivados; qué impactos tiene dicha explotación sobre las poblaciones y comunidades locales; qué iniciativas se están ejecutando para mejorar la gestión de las rentas; y qué casos existen de buenas prácticas. El presente estudio se centra sobre todo en dichas claves, y específicamente en relación a los minerales e hidrocarburos. Se reseñan también algunos apuntes sobre la presencia de España en la región y sus intereses, junto con una serie de orientaciones para reforzar la coherencia en este ámbito. Se han analizado además tres estudios de caso: Angola, Guinea Ecuatorial y Ghana (Anexo I).

En concordancia con todo lo anterior, la agrupación REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) –formada por organizaciones mayoritariamente ligadas a instituciones religiosas y de inspiración cristiana, y que cuenta con una amplia experiencia en África Subsahariana– ha promovido el presente estudio, enmarcado a su vez en la segunda fase de su Campaña “África: cuestión de vida, cuestión debida” y que, durante tres años, se centrará en la problemática de la explotación y expolio de los recursos naturales en África subsahariana, así como en sus impactos sociales y medio ambientales.

Para la realización de este estudio se han consultado sobre todo fuentes secundarias (libros, informes, documentos, y artículos de prensa). En el anexo II figura la bibliografía analizada. Las fuentes primarias proceden del trabajo de campo realizado por el autor de este informe en un proyecto anterior sobre seguridad energética en Angola; y de diversos viajes, junto con colaboradores de RESET, para la evaluación de varios proyectos de cooperación al desarrollo en Mozambique, República Democrática del Congo (RDC), Angola y Sudán del Sur.

2. Breves apuntes históricos

En ninguna otra región del mundo la huella de la historia ha sido tan devastadora como en África Subsahariana. La trata de esclavos (iniciada a través de la ruta transahariana, y continuada por los europeos a partir del siglo XV) tuvo como objetivo a entre 11 y 18 millones de africanos, e introdujo una nueva dimensión de la violencia en dicha región, con impactos de todo orden en amplias zonas.

La Conferencia de Berlín (1885) formalizó el reparto unilateral de las potencias occidentales respecto de los territorios africanos, trazando fronteras estatales con tiralíneas –las cuales persisten a día de hoy, salvo en el caso de Eritrea y Sudán del Sur–, y enmarcando en ellas a numerosos grupos étnicos. La colonización –formulada desde occidente, y sustentada en la conquista de pueblos y territorios, el comercio y la misión civilizadora– se orientó en términos económicos hacia un aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio exclusivo de las respectivas metrópolis. Las escasas infraestructuras desarrolladas se diseñaron para el transporte y exportación de las materias primas hacia Europa.

La dependencia de África del comercio mundial –a través de una especialización exclusiva en la producción y exportación de materias primas– se generó también a partir de la colonización. Algunas de las actuales multinacionales europeas participaron en la explotación y expolio de las riquezas africanas, a partir de las cuales desarrollaron su imperio empresarial. El saqueo (caucho, marfil) y los crímenes (cerca de 5 millones de víctimas mortales) alcanzaron dimensiones inimaginables en el caso del ex Congo belga (actual RDC) bajo el reinado de Leopoldo II.

Durante la colonización se produjeron también cambios decisivos en el ámbito socio-cultural y político local, que implicaron la pérdida de la legitimidad de las autoridades tradicionales, las cuales mantenían una relación de clientelismo “tradicional” con sus comunidades pero sujeta a una cierta rendición de cuentas (Chabal 2011). Las potencias coloniales estructuraron su poder en el apoyo de determinadas élites y etnias, en detrimento de otras, exacerbando las rivalidades.

A través del proceso de descolonización, desarrollado principalmente en la década de los 60, se creó el estado moderno africano, reconocido como miembro soberano de un sistema internacional configurado por las potencias occidentales. Los nuevos estados independientes tendrían a partir de entonces que enfrentarse a desafíos sustanciales relativos a sus prerrogativas soberanas y que todavía hoy persisten, como la construcción de un proyecto nacional común, el control de la totalidad del territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la articulación de un sistema fiscal redistributivo.

Algunos líderes como Nkruma (Ghana) y Lumumba (RDC) reivindicaron con firmeza una gestión de los recursos naturales africanos orientada a un desarrollo socio-económico del conjunto de las poblaciones locales. Los nuevos estados fueron adquiriendo progresivamente un mayor control de sus minerales e hidrocarburos. En 1989 un 41,5% de la producción minera estaba en manos estatales, llegando en algunos países como RDC y Zambia a superar el 85% (Banco Mundial, 1992). Las décadas de los 60 y 70 –con los precios de las materias primas en los mercados internacionales en niveles muy bajos– arrojaron un saldo negativo en relación a la gestión de dichos recursos.

Por otro lado, los nuevos estados se sustentaron tras la Independencia en regímenes de partido único, desarrollaron sus redes de clientelismo en base a líneas de filiación étnica; y establecieron relaciones tanto políticas como empresariales con las ex potencias coloniales. Francia desplegó con sus ex colonias una red de patronazgo, conocida como *Françafrique*. Estableció en ellas numerosas bases militares para proteger sus intereses y apoyar a sus aliados autócratas, y utilizó a la multinacional petrolera francesa Elf (actualmente, Total) como principal brazo de su política exterior, la cual se vio inmersa en diversos conflictos, apoyando a una de las partes.

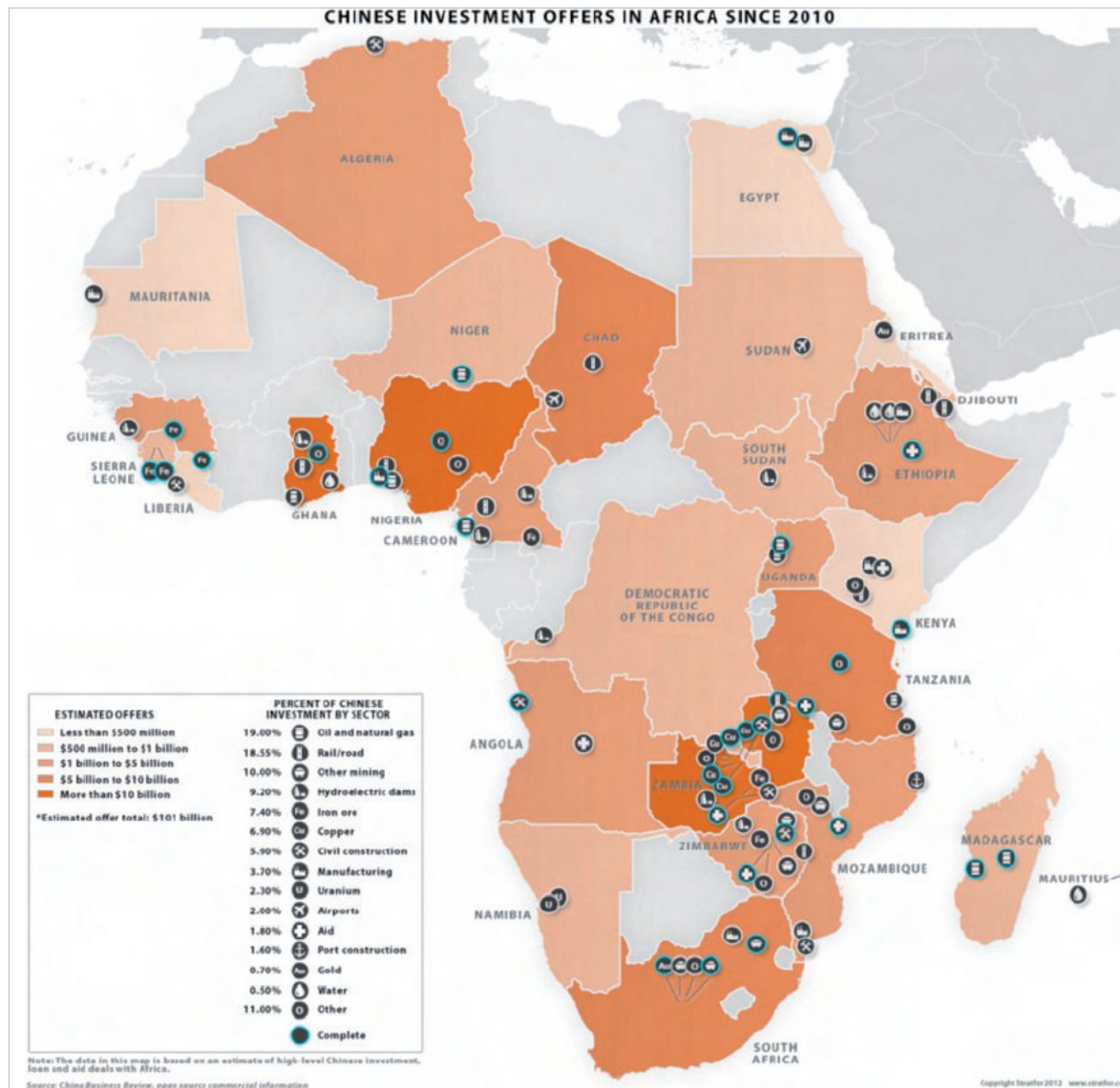
Igualmente, la ayuda extranjera tuvo un impacto directo sobre las economías locales y fortaleció la hegemonía de dichas élites, conformando la denominada “extraversión” de los estados africanos (Bayart 2000). Durante el período de la Guerra Fría tuvieron lugar numerosos conflictos –con un saldo de varios millones de muertos– y la región fue el escenario del enfrentamiento entre EEUU y la URSS, cada una de las dos potencias apoyando a sus respectivos aliados africanos y a las diferentes facciones en conflicto (como, por ejemplo, durante la guerra civil de Angola).

En la década de los 80 y los 90 los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), basados en un enfoque neo-liberal –a través de la privatización de empresas públicas y recortes en servicios sociales y subsidios públicos, entre otras medidas– tuvieron impactos negativos muy graves sobre la población africana. Por otra parte, los gobiernos africanos aprovecharon el aumento de precios de las materias primas (iniciado a finales de los 70) para embarcarse en amplios programas de gasto, lo que generó –a partir del declive posterior de dichos precios– un endeudamiento de amplias proporciones. Además, algunos dirigentes y élites locales se aprovecharon de dichas rentas y de los préstamos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) para acaparar y evadir ingentes sumas de fondos. El caso más flagrante fue el de Mobutu Sesse-Seko, ex presidente de la actual RDC, que desvió cientos de millones de dólares hacia bancos extranjeros. El conocimiento del FMI de esta situación no impidió que el país siguiese recibiendo créditos y generando endeudamiento.

El petróleo ha desempeñado también un papel relevante en el agravamiento y prolongación de diversos conflictos, como en Nigeria (Biafra, entre 1966 y 1969) o República del Congo (también denominada Congo-Brazaville, entre 1997 y 1999). En el caso de los minerales, algunos de ellos han sido objeto de una importante atención mediática, como los diamantes (Sierra Leona-Liberia, Angola) o el coltán (columbita-tantalita; RDC). En este último país los minerales continúan alimentando la violencia y desestabilizando diversas zonas del este, con un impacto además regional, destacando la implicación de Ruanda.

3. Contexto actual

África Subsahariana está atravesada por diversas dinámicas que parecen convivir en planos temporales diferentes. Por un lado, se ha producido el desembarco de varias potencias emergentes, con nuevas estrategias; se ha intensificado de forma exponencial tanto la actividad como el uso de nuevas tecnologías de exploración y extracción; los fondos de inversión internacionales se orientan cada vez más a la región; y las élites neoliberales africanas (muchas de ellas auténticas “élites extractivas”) se han convertido en ciudadanos activos de un mundo globalizado.



Por otro lado, hay cuestiones determinantes que apenas han cambiado: los sectores minero y de hidrocarburos siguen siendo auténticos enclaves económicos, sin apenas diversificación económica; la participación del continente africano continúa siendo marginal en el comercio internacional (3% del total) y las inversiones directas extranjeras (2%), correspondiendo dichos porcentajes en su gran mayoría a los hidrocarburos y minerales. La inserción de África en la globalización sigue estando basada en la exportación de materias primas sin procesar.

En torno a los recursos tienen lugar numerosas dinámicas sumergidas y transfronterizas. Es el caso, por ejemplo, del contrabando de petróleo con origen en el Delta del Níger (en donde se estima que se roban unos 200.000 barriles diarios), una buena parte del cual tiene como destino los mercados internacionales; la explotación del coltán, oro y otros minerales en RDC por parte de grupos rebeldes y otros actores armados; la exportación ilegal de madera por parte de China desde diversos países. Todos estos procesos son el resultado de las alianzas y el solapamiento de redes internacionales de traficantes, intermediarios extranjeros, negociantes y tecnócratas locales, que dejan en la sombra franjas enteras de las relaciones económicas internacionales en África (Mbembe 2011).

A nivel geopolítico, se da una "nueva pugna" sobre los recursos naturales en la región subsahariana, con rasgos claramente diferenciados respecto a etapas anteriores. Las múltiples vertientes

del desembarco de China en África y su estrategia, han generado un intenso debate². El motor de la política exterior de China en la región subsahariana es la obtención de petróleo y minerales, orientada a continuar en la senda de crecimiento de las últimas tres décadas (con una media del 10% del PIB; si bien en 2012 no llegó al 8% y en 2013 podría rondar el 7,5%) y amortiguar las crecientes tensiones internas.

China lleva desde finales del siglo XX estableciendo acuerdos con todo tipo de regímenes africanos. Su capacidad de negociación y de licitación por parte de sus empresas estatales con el fin de asegurarse el suministro energético y minerales es muy amplia, y se sustenta en la concesión de créditos de miles de millones de dólares con intereses muy bajos (con el consiguiente endeudamiento de las arcas africanas); y en la ejecución de numerosas infraestructuras (carreteras, hospitales, estadios, cuya calidad de construcción ha recibido muchas críticas) por parte de empresas chinas (siendo la gran mayoría trabajadores chinos). Su política de “no injerencia” en los asuntos internos de los países africanos –acompañada con la venta de armas– encaja perfectamente con el perfil de la élite autócrata de países como Angola y RDC, y de regímenes despóticos como el de Sudán y Zimbabwe.

Otras potencias emergentes, como India, Brasil o Corea del Sur, con un peso creciente a nivel comercial y de inversiones, están contribuyendo a su vez a la referida contienda por los recursos naturales. Los países que forman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) computan –excluyendo a este último– cerca de 200.000 millones de euros (la mayoría por parte de China) de intercambios comerciales y más de 60.000 millones en inversión directa acumulada, la mayoría en recursos naturales.

Oil in Africa			
Country or Region	Proven Reserves of Crude Oil (Billion barrels) 2012	Production of Oil ('000 bpd) 2011	Export of Oil ('000 bpd) 2011
AFRICA TOTAL	124.209	9,378	8,371
Libya	47.100	502*	1,378
Nigeria	37.200	2,528	2,341
Algeria	12.200	1,884	1,097
Angola	9.500	1,840	1,929
Sudan and South Sudan (combined)	5.000	455	389
Egypt	4.400	727	85
Gabon	2.000	244	225
Congo (Brazzaville)	1.600	298	288
Chad	1.500	124	126
Equatorial Guinea	1.100	303	319
Uganda	1.000	–	–
Ghana	0.660	78	–
Tunisia	0.425	70	78
Cameroon	0.200	62	56
Democratic Republic of Congo (DRC)	0.180	20	22
Ivory Coast	0.100	41	32
Mauritania	0.020	8	7

** Libya's oil production is usually around 1.6 million bpd, but was severely impacted in 2011 by the civil war.*

Sources: US Energy Information Administration (International Energy Statistics), Oil and Gas Journal.

Please Note: This table refers to proven oil reserves which may be very different to reserve estimates.

2 China en África ¿Ayuda o arrasa?, Varios autores, Ed. Oozeabap, 2008.

Las potencias occidentales no cuentan, por su parte, ni con medios ni con credibilidad suficiente para contrarrestar la referida estrategia de China. Los acuerdos con los regímenes represores de turno, su colaboración en el expolio de los recursos africanos y una “condicionalidad democrática” limitada a la celebración de comicios electorales y que se devalúa por completo frente a los intereses económicos, son algunos de los rasgos que caracterizan la actuación pasada y presente de dichas potencias, y las deslegitima frente a las poblaciones africanas. Lo anterior no obsta para que desde diferentes organismos internacionales y gobiernos occidentales se lleven a cabo políticas y programas de cooperación al desarrollo que, según los casos, tienen una valoración positiva, y son apreciados por las comunidades locales.

EEUU lleva desde principios del presente siglo diversificando sus fuentes de suministro y centrando su atención en la región del Golfo de Guinea, de donde importa en torno a un 18% del petróleo que consume. Muchos de los países miembros de la UE, con una gran dependencia energética de las importaciones, tienen también puesto el punto de mira en el petróleo y el gas de la región subsahariana desde hace décadas, y apuestan por aumentar sus inversiones e importaciones.

3.1. Crecimiento *versus* desarrollo humano sostenible

Como se ha señalado, el contexto actual está marcado por los precios al alza de las materias primas, un crecimiento económico considerable y, por el contrario, un grado de desarrollo humano generalizado bajo mínimos. Los aspectos más relevantes de esta cuestión son los siguientes:

- **Después de una década de crecimiento económico sostenido –con una media estimada por el BM de un 5% del PIB– África Subsahariana presenta un panorama marcado por disparidades extremas.**

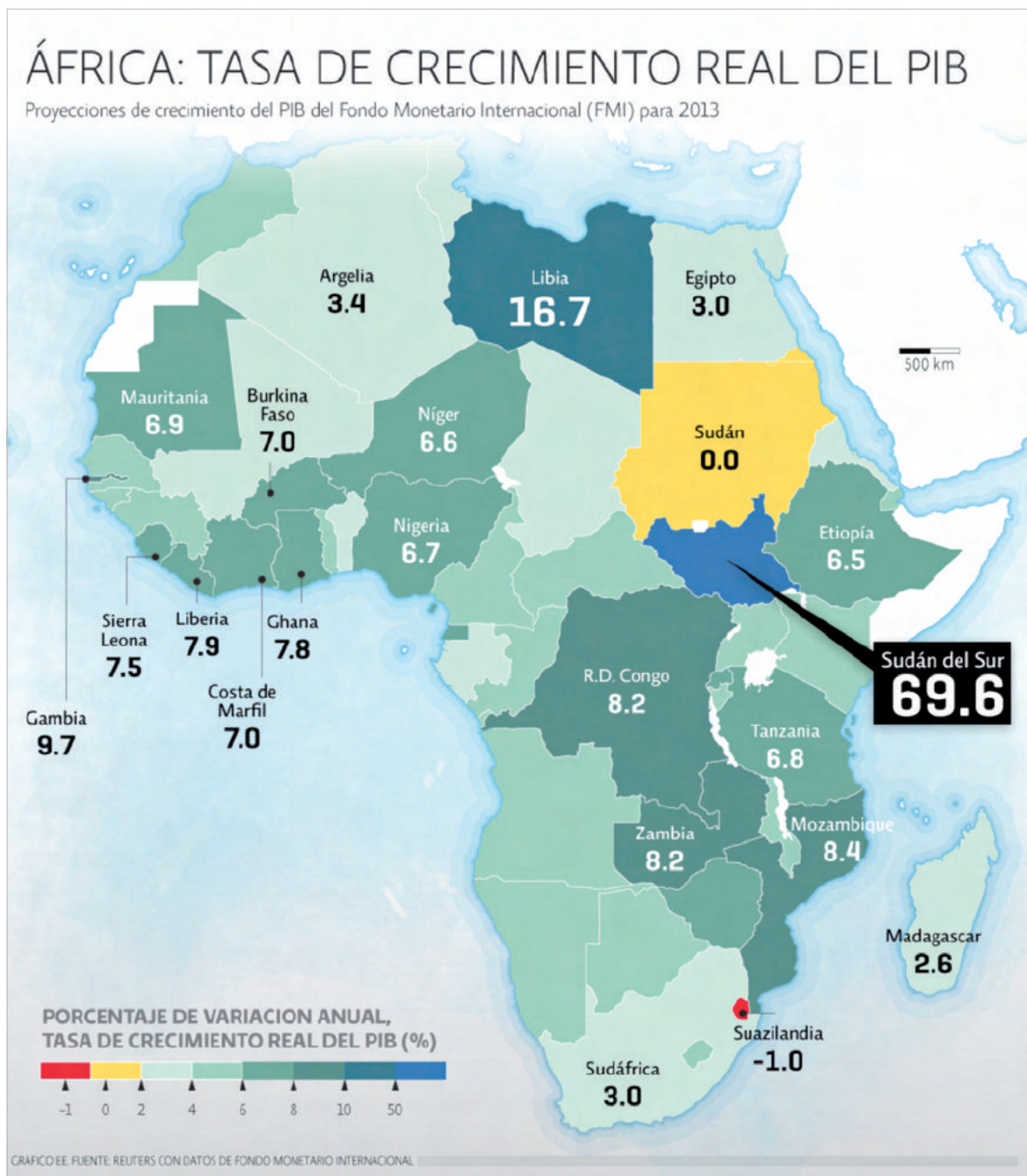
Por un lado, las economías de muchos países subsaharianos han superado de forma notable la crisis económica y financiera mundial, con tasas de crecimiento en algunos casos muy altas, entre los que destacan, según el PIB de 2012, Sierra Leona (20%), Níger (11%), Costa de Marfil (8,2%), Angola (8,1%), Etiopía (7,8%), Ruanda (7,7%), Ghana (7,5%) y Mozambique (7,5%). Varios de ellos superaron, por tanto, el crecimiento porcentual del PIB de China (7,8%) e India (4,1%). El FMI prevé que entre 2010 y 2015, siete de las diez economías que más rápido crecerán en el mundo estarán en África Subsahariana.

Este crecimiento económico está sustentado en buena parte en las riquezas minerales y en hidrocarburos, con precios que han batido récords históricos. Los países exportadores de petróleo de la región crecieron una media de un 6,7% en 2012.

China ha desempeñado un papel clave. Su cuota de participación en la demanda mundial de cobre, aluminio y zinc se ha duplicado desde el 2000, y se ha triplicado respecto al hierro, níquel y plomo. Igualmente, su porcentaje en el consumo global de los metales de base aumentó del 12% en 2000 al 42% en 2011.

- **De otro parte, sin embargo, la gran mayoría de dichos países no han conseguido mejoras en las condiciones de vida de las capas sociales más pobres ni en la prestación de servicios sociales básicos.** Los 12 países que figuran en los últimos lugares del IDH 2012 del PNUD son subsaharianos, y 9 de ellos son ricos en RRNN.

No obstante, según el BM se han producido avances significativos en la lucha contra la pobreza (entre 1996 y 2010 el porcentaje de africanos viviendo con menos de 1,25 \$ diarios habría pasado del 58% al 48,5%), y en algunos sectores como el de la sanidad (con avances en relación a determinadas enfermedades, como la malaria y el VIH-Sida) y la educación (aumentando el porcentaje de escolarización de niños y, especialmente, de niñas en diversos países).



- Pese a los ratios del PIB reseñados, **aquellos países que han crecido más rápido gracias a los hidrocarburos y minerales tienen tasas peores de reducción de pobreza que los que no poseen en un grado tan alto dichos recursos.** En algunos, como en Angola y Gabón, se ha producido incluso un aumento de la pobreza extrema.

Los casos de Guinea Ecuatorial y Angola son muy significativos. Ambos países presentan un aumento del ingreso *per capita* acumulado entre 2000 y 2011 de un 272% y un 111% respectivamente, así como una media de crecimiento del PIB en dicho período del 16,9% el primero y 10%, el segundo. Pese a ello, los progresos realizados en desarrollo humano sostenible son mínimos. La diferencia entre ingresos *per cápita* e indicadores de desarrollo humano en ambos países está entre las más altas del mundo. Tomando como referencia dichos ingresos, Guinea Ecuatorial debería estar 91 puestos más arriba en el IDH del PNUD y Angola 38. Otro país petrolero, Gabón, debería ocupar una plaza en dicha clasificación 40 puestos más arriba.

- Además, en los países ricos en recursos naturales **el crecimiento del PIB ha ido en paralelo al crecimiento de las desigualdades sociales**. Este es el principal motivo por el cual la riqueza sigue sin traducirse, año tras año, en un aumento del bienestar social (*Africa Progress Panel*, 2013). Las desigualdades sociales van acompañadas de la falta de oportunidades vitales y de desarrollo profesional y laboral para la gran mayoría de la población, y de un aumento de las tensiones sociales.

WEALTH/WELLBEING GAP



Source: UNDP (2011), Human Development Report.

La región subsahariana alberga a 6 de los 10 países del mundo con mayores desigualdades sociales, con su gigante económico, Sudáfrica –que produce tres cuartas partes del platino del mundo, 40% del cromo y más del 15% del oro y manganeso– a la cabeza. Además de Sudáfrica (en donde el 10% más rico de la población posee el 51,7% de los ingresos nacionales, y el 10% más pobre únicamente el 1,2%), destacan otros países con grandes riquezas en recursos naturales, como Namibia (quinto productor de uranio mundial; con el 10% poseyendo el 54,8% y el 10% más pobre el 1,4%), Angola (44,7% frente al 0,6% del 10% más pobre), Nigeria (38,2% frente al 1,8%) y República Centro Africana (46,1% frente a 1,2%), entre otros.³



La masacre de Marikana, en Sudáfrica, es uno de los más claros exponentes de las repercusiones derivadas de dichas desigualdades sociales y de la explotación de los recursos minerales al margen de la población y en condiciones de gran precariedad laboral.

Sudáfrica y la masacre de Marikana⁴

- La mayor represión con víctimas mortales (34 mineros) desde los tiempos del *apartheid* convulsionó, en agosto de 2012, al gigante económico de la región subsahariana y reveló de forma explícita sus deficiencias socio-económicas y políticas. Referencia internacional sobre reconciliación nacional y democracia durante la década de los 90 bajo el liderazgo de Nelson Mandela, Sudáfrica tiene en su haber determinados avances en derechos y libertades fundamentales; desarrollo económico (con un tercio del PIB del conjunto de países subsaharianos; siendo el sector minero su espina dorsal: 1 millón de trabajadores, 18% del PIB y 50% de los ingresos por divisas); y política exterior (con un papel clave en la Unión Africana y en labores de construcción y mantenimiento de la paz a nivel regional). En el otro lado de la balanza, existen grandes retos en materia de empleo, educación, seguridad ciudadana y salud (con una esperanza de vida de apenas 53 años, y en torno a un 10% de sus 50 millones de habitantes infectados por el VIH-SIDA).

³ World Development Indicators, World Bank (2013).

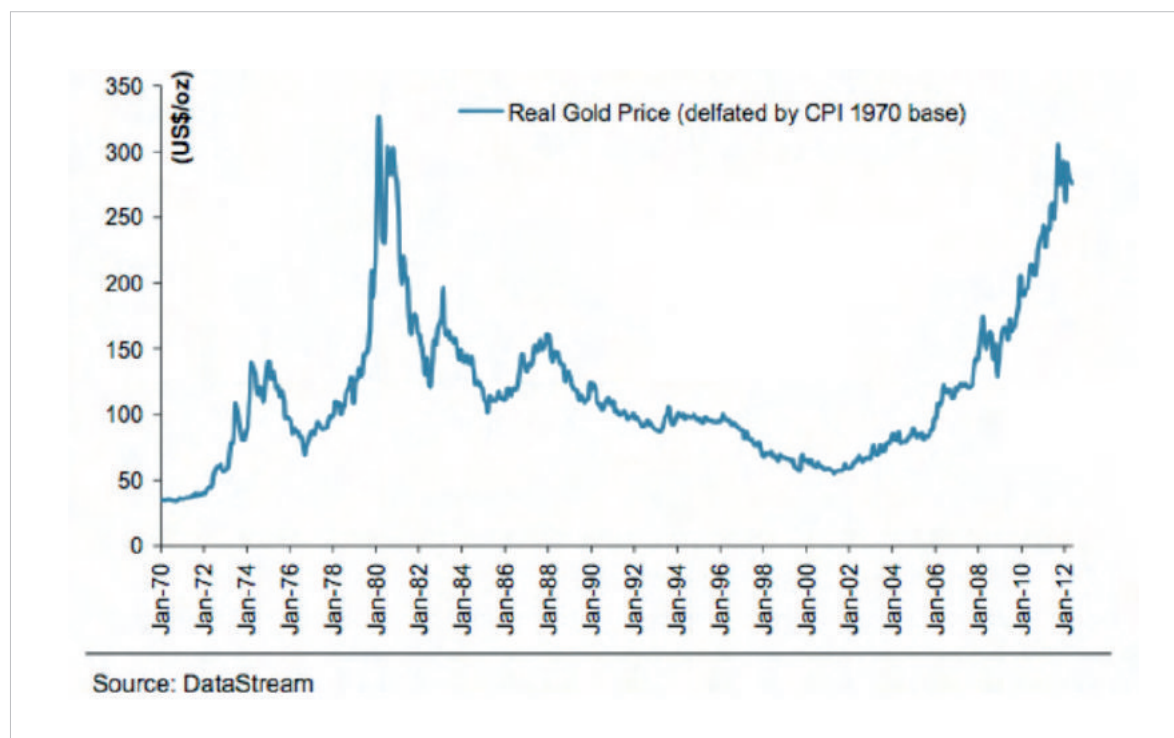
⁴ Extracto del artículo publicado en El País (blog de la Fundación Alternativas), “El futuro de Sudáfrica pasa por Marikana”, Jesús García-Luengos, 26 de octubre de 2012.

Detrás de la reclamación salarial de los trabajadores de las minas de platino propiedad de la empresa británica *Lonmin* subyacen las precarias condiciones de vida de las comunidades de mineros y, como gran telón de fondo, las ingentes disparidades en el reparto de la riqueza nacional (con la mayor tasa de desigualdad del planeta) y la precariedad en servicios sociales básicos. La conflictividad social en Sudáfrica ha ido en aumento durante los años de la presidencia de Jacob Zuma a la par que la represión violenta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y la impunidad. La corrupción ha adquirido niveles históricos. A resultas de la citada masacre no se produjo ningún cese ni dimisión a nivel político o policial. Lo sucedido en Marikana subraya la profunda desafección de amplias capas de la población hacia una buena parte de la clase política, sindical y empresarial.

- Es importante reseñar también que **muchos analistas indican que es probable que el ciclo actual se prolongue durante bastantes años más**, configurándose como el tercer ciclo de largo recorrido de la historia⁵.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la demanda general de metales crecerá a razón de un 5% anual de media hasta 2030. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) predice un aumento de entorno a un tercio del consumo de petróleo hasta 2035. No obstante, dada la volatilidad tradicional de los precios de las materias primas, la evolución no deja de ser bastante imprevisible, especialmente si se tienen en cuenta los indicadores a la baja que empiezan a presentar algunas potencias emergentes.

- Por otra parte, **durante la década pasada se ha fortalecido la política fiscal y macroeconómica de algunos países subsaharianos, lo cual ha reforzado su capacidad para gestionar la volatilidad de los mercados y aumentar los gastos públicos en las etapas de recesión.**



⁵ El primero se produjo a finales del siglo XIX y vino motivado principalmente por la industrialización en el continente americano, y el segundo tuvo lugar después de la segunda Guerra Mundial, a partir de la reconstrucción de EEUU y Japón.

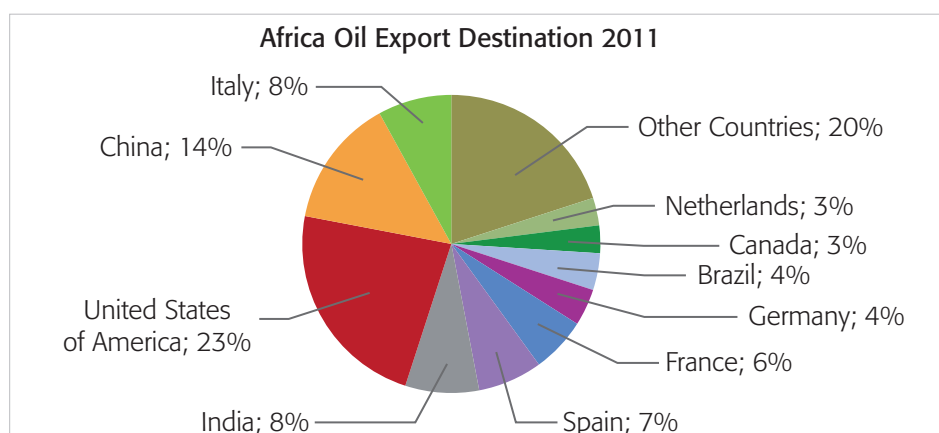
Cabe por último apuntar que la producción de gas y petróleo de esquisto, que se extrae a través de la técnica del *fracking* por parte de EEUU (y que está recibiendo, por sus impactos contaminantes y potencialmente sísmicos, numerosas críticas y la oposición de diversos grupos sociales en muchos países, incluida España), puede alterar diversos parámetros geopolíticos y estimaciones económicas⁶.

3.2. Dinámicas de exploración y explotación al alza

El ciclo alcista de los minerales e hidrocarburos reseñado está provocando un aumento muy considerable de las inversiones extranjeras y de los proyectos de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Las inversiones en el sector minero se multiplicaron por 4 entre 2000 y 2010, especialmente en el sector del hierro y cobre. La región subsahariana, actualmente representa el 15% del total mundial de dichas inversiones. Este aspecto y los volúmenes de inversión en el sector de hidrocarburos, contrastan con las grandes carencias en las redes de suministro eléctrico de los países subsaharianos. La capacidad estimada de generación eléctrica de toda África Subsahariana es similar a la de España.

Las claves y consideraciones a tener en cuenta son las siguientes:

- **Las nuevas tecnologías han propiciado avances importantes para una exploración más eficiente**, y su coste en África Subsahariana es además sensiblemente inferior al de otros países ricos en minerales, como Australia y Canadá. La región está en una buena parte sin explorar, y se estima que las reservas actuales se pueden incrementar en gran medida. Analistas y entidades financieras, bancos, fondos de inversión, organizaciones empresariales y multinacionales conciben África Subsahariana como el nuevo Eldorado.
- **Los precios altos del petróleo están permitiendo continuar con la actividad exploratoria, ampliarla a nuevas regiones y desarrollar nuevos proyectos.** En el caso de China, su necesidad de garantizarse el suministro energético le ha llevado a invertir en regiones hasta ahora inexploradas por razones de complejidad y seguridad; a firmar sustanciosos acuerdos con gobiernos autócratas como el de Angola o Sudán; y a posicionarse en diversos países, como en Níger, donde es pionera en la producción y exportación de petróleo. En este país y en Chad, China ha construido una refinería, de la que carecen la gran mayoría de países africanos productores de petróleo.



⁶ Se estima que gracias a la producción de gas de esquisto EEUU puede ser autosuficiente energéticamente en un 99% en 2030 (en 2005 la autosuficiencia energética era del 70%). Según la edición de 2012 del "World Energy Outlook" de la Agencia Internacional de la Energía, EEUU se sitúa ya por delante de Rusia como primer productor de gas y sobrepasaría a Arabia Saudí como primer productor de petróleo del mundo en 2 o 3 años. Estas estimaciones son rebatidas –por considerarlas excesivamente altas– por parte de algunas organizaciones sociales.

- **Las dinámicas extractivas de minerales se están intensificando de forma exponencial, con los consiguientes retos para los gobiernos africanos cuya riqueza está atrayendo a un progresivo número de empresas occidentales y de potencias emergentes.** A modo de ejemplo, Guinea Conakry tiene el 8% de las reservas mundiales de bauxita; la República Democrática del Congo produjo en 2010 la mitad del cobalto mundial (en 2010); y Zambia es el sexto país del mundo productor de mineral de cobre y el quinto de cobalto.

Otra referencia que da la medida de la gran riqueza existente en recursos naturales es la de los países productores de oro (principalmente, Burkina Faso, Ghana, Guinea Conakry, Sudáfrica, Malí y Tanzania) cuya cuota de producción mundial se ha duplicado desde el año 2000. El precio del oro en los mercados ha aumentado desde 445 \$/onza en 2005 hasta los 1.300 \$/onza en septiembre de 2013.

Por lo que respecta al hierro, la demanda de acero de China, India y otros países emergentes, ha generado una apuesta sin precedentes y de amplias dimensiones en diversos países, a la par que ha aumentado la competencia con las multinacionales occidentales. En Mauritania hay unos 180 permisos de exploración en curso; Liberia tiene previsto producir 15 millones de toneladas en 2015 (4 millones en la actualidad) y ha concedido, entre otras, una licencia a la multinacional india Arcelor Mittal por 2.000 millones de dólares; y Sierra Leona y Guinea Conakry albergan también grandes proyectos.

Esta “fiebre extractiva” también se da en relación con otros minerales y en otros países. Es el caso de Malí, que ha triplicado en la última década sus exportaciones de oro, y otorgado permisos de exploración a más de una decena de nuevas multinacionales. En el vecino Níger, el uranio, cuyo monopolio perdió la multinacional Areva en 2007, es objeto de más de un centenar de licencias de exploración. China (con 26 reactores nucleares en construcción) explota en este país su primera mina de uranio en el extranjero. La competencia por el uranio africano –liderada por Francia– se extiende a otros países, como Namibia, Gabón, RDC, República Centro Africana y Sudáfrica. Esta actividad invade en muchos casos espacios naturales supuestamente protegidos, como en Sierra Leona y RDC, donde el 80% y 50% respectivamente de su territorio está sujeto a licencias de exploración y explotación minera, forestal y petrolera.



En Sierra Leona, una empresa china ha construido un tren de alta velocidad para transportar tierra con el mineral sin tratar que llega hasta el puerto, se llevan literalmente la tierra.

Las prospecciones petrolíferas también están aumentando. Desde 2000 se estima que éstas se han triplicado (Ernst & Young, 2012) y las reservas descubiertas de hidrocarburos están aumentando, especialmente en países del este de África, como Uganda, Mozambique, Tanzania y Kenia. Estos descubrimientos van a implicar un cambio geopolítico de grandes dimensiones en esta región. El *US Geological Survey* estima que las áreas costeras del Océano Índico podrían albergar más de 250 trillones de metros cúbicos de gas y 14.500 millones de barriles de petróleo, un volumen equivalente a las reservas conocidas de Emiratos Árabes y Venezuela, y ligeramente inferior al de EEUU. El descubrimiento de dos grandes yacimientos de gas en Mozambique la perfilan en unos años como el tercer productor de gas mundial. Incluso un país como Somalia, arrasado por años de sucesivos conflictos y en una situación todavía de extrema fragilidad, está licitando diversas concesiones para la exploración de petróleo.

Los productores de crudo más tradicionales, como Angola y Nigeria también han aumentado sus reservas durante la última década (Angola las ha doblado y Nigeria las ha aumentado en un 20%). En Guinea Ecuatorial (cuya producción inició un cierto declive a partir de 2004) se descubrieron dos grandes yacimientos en 2011. La región de África del Oeste está aumentando también sus niveles de producción de gas.

- **Las estimaciones reseñadas en 2012 por el BM y el FMI en muchos países indican un potencial extraordinario para multiplicar sus ingresos.** Ghana podría generar durante la primera fase de producción petrolífera, actualmente en curso, un equivalente al 2,3% de su PIB (850 millones de dólares USA); Guinea Conakry (hierro) y Liberia (hierro y petróleo) podrían ingresar, cada uno de ellos, 1.600 millones de dólares, lo que equivale al 31% y 147% del PIB respectivo de 2011; Mozambique presenta una estimación de ingresos de 3.500 millones de dólares anuales, por sus exportaciones de carbón junto con las que iniciará en un futuro próximo de gas (lo que representa un aumento de entre el 100 y el 300% del presupuesto estatal actual). Otros casos son los de Tanzania, que podría ingresar 3.500 millones anuales en los próximos años por las exportaciones de gas, oro y níquel y Uganda, cuyas expectativas para el año 2020 en torno al petróleo podrían traducirse en 2.000 millones de dólares anuales.
- **Todos estos datos al alza deben ser atemperados, ya que los recursos minerales e hidrocarburos son finitos.** Por tanto, pese a las dinámicas referidas, la producción de minerales y de hidrocarburos no deja de tener un límite temporal. En países como Gabón y Guinea la producción de crudo ha atravesado fases de declive. Esta es una cuestión clave para preservar los derechos de las futuras generaciones.

3.3. Recursos naturales, seguridad y desarrollo: el Sahel y el Golfo de Guinea

El Sahel y el Golfo de Guinea son dos de las regiones de África Subsahariana que presentan actualmente mayores desafíos para los gobiernos locales y la comunidad internacional en términos de seguridad y desarrollo.

- El caso del Sahel es paradigmático. Las dinámicas de explotación de los recursos naturales junto con otros factores como el cambio climático, han provocado una fragilidad e inestabilidad estructural que afecta gravemente a diversos países de la zona. El conjunto de su población estimada es de 100 millones de habitantes, y cuenta con una de las tasas demográficas más altas del mundo.

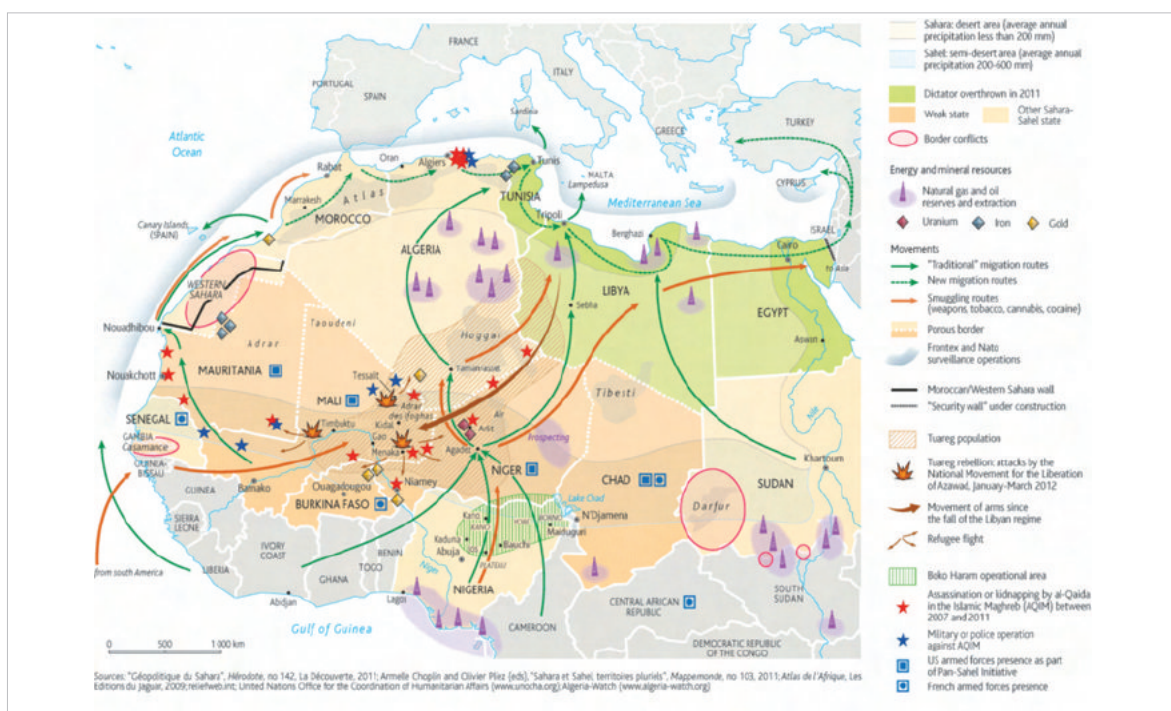
Varios de los países sahelianos no tienen salida directa al mar. Y la mayoría de ellos tienen importantes riquezas minerales (como Mauritania, Malí y Níger) y de hidrocarburos (como Chad y Sudán), mientras que figuran en los últimos puestos del IDH del PNUD. Su producción alimentaria depende en un 95% de la lluvia. El cambio climático ha intensificado de forma muy considerable

la vulnerabilidad de las poblaciones y ha provocado migraciones de las comunidades pastorales hacia el sur en busca de lluvia y pasto para el ganado, colisionando con los espacios de poblaciones de agricultores y derivando en numerosos conflictos.

A su vez, las fronteras del Sahel son absolutamente porosas (al igual que un gran número de territorios fronterizos africanos) y durante los últimos años se han conformado múltiples redes criminales que trafican con drogas y armas, con la participación además de diversos grupos *yihadistas*. Durante décadas la población tuareg del norte de Malí —una región marginada con grandes déficits de servicios e infraestructuras— ha reclamado al gobierno central una mejora de sus condiciones de vida. El oro de Malí (un país con una esperanza de vida al nacer de 52 años), explotado desde principios de los 90 y cuyas minas están en el sur del país, no ha contribuido tampoco a paliar dicha marginación. El conflicto de Malí, a partir de 2011, ha puesto de manifiesto los ingentes desafíos tanto de este país como de una región en la que hay 600.000 refugiados y más de 400.000 desplazados internos.

Igualmente, Mauritania (con una esperanza de vida de apenas 59 años) y Níger (55 años) han perdido una gran oportunidad desde la década de los 60 para utilizar las rentas derivadas, respectivamente, del hierro y del uranio en beneficio de sus poblaciones locales y en el refuerzo de sus capacidades institucionales, ante los grandes desafíos, tanto sociales como humanitarios, a los que deben hacer frente de forma recurrente. En 2012 se produjo la tercera gran crisis humanitaria desde 2005, a resultas de la sequía, las malas cosechas y la subida de los precios de los alimentos. Actualmente, cerca de 12 millones de personas se encuentran en situación de máxima inseguridad alimentaria y 1,5 millones de niños y niñas están en riesgo de padecer desnutrición aguda severa.

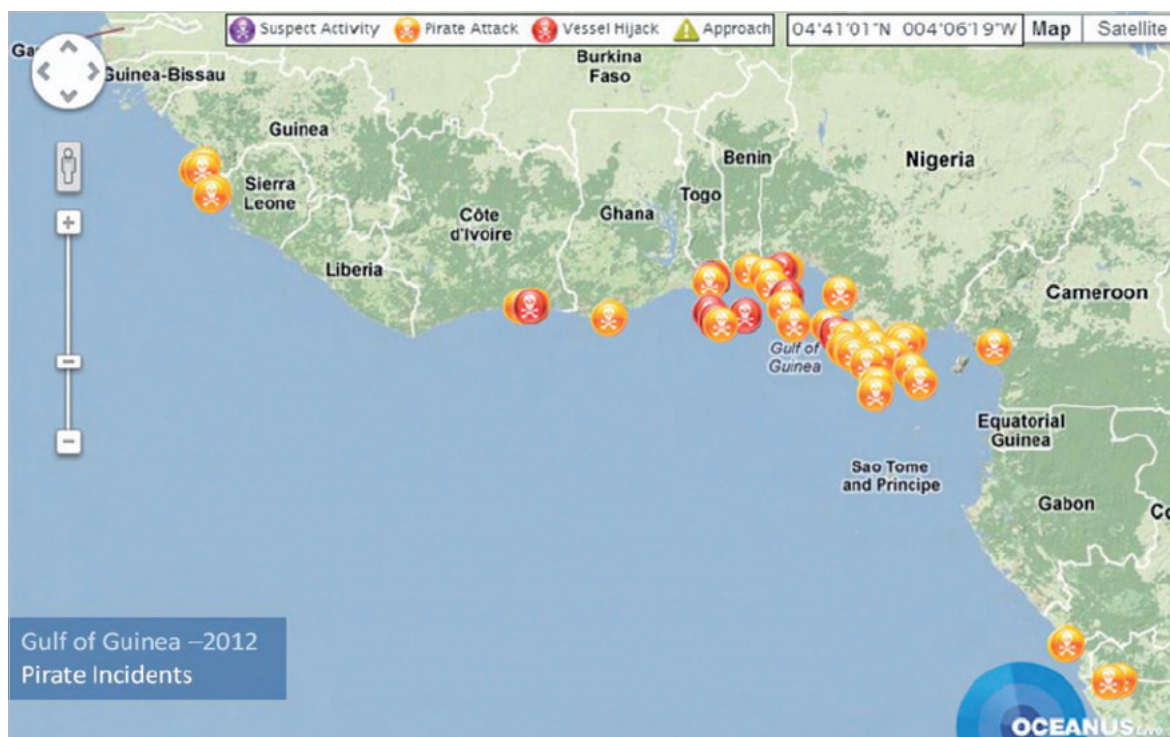
La población tuareg de Níger reclama también desde hace años un reparto más justo de las rentas del uranio y una compensación por los impactos sobre la salud y el medio ambiente derivados de su explotación. La multinacional francesa Areva (con participación mayoritaria del Estado francés) importa de Níger entre el 30% y 40% de todo el uranio que consume Francia. La energía nuclear en Francia supone tres cuartas partes de la producción nacional de electricidad (el uranio nigerino alumbra, aproximadamente, 1 de cada 3 bombillas francesas).



- En el Golfo de Guinea la explotación y expolio de los recursos naturales está en el centro de las actuales dinámicas de inestabilidad y redes criminales que atraviesan esta zona. La piratería ha proliferado en los últimos años y ha desplazado en intensidad a la región costera del Mar Rojo. El epicentro de las dinámicas criminales se encuentra en el Delta del Níger, la región petrolífera de la que sale todo el petróleo de Nigeria (primer productor africano, con unos 2,5 millones de barriles/día) y en la que habitan más de 30 millones de personas. El crudo es la auténtica arteria aorta del país más poblado de África (140 millones), ya que representa en torno al 40% del PIB, el 80 %de los ingresos federales y el 90% de los ingresos por exportaciones.

Pese a tanta riqueza, el Delta del Níger se caracteriza por una acuciante pobreza, impactos medio ambientales devastadores y una enorme tensión social que derivó en crecientes protestas sociales durante los años 90 y en un conflicto abierto entre el principal grupo armado, El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (creado en 2005) y el gobierno central. Actualmente existe una tregua entre ambas partes, si bien continúan las actividades relacionadas con el robo de petróleo y el refinado clandestino, además de secuestros de trabajadores extranjeros. Existe un vínculo directo entre la pobreza y los impactos devastadores de la explotación del petróleo, y la situación actual de alta inestabilidad y redes criminales. La población viene percibiendo desde hace décadas como se aprovechan del petróleo las élites nacionales y locales, y las multinacionales extranjeras (*International Crisis Group*, 2012). Si se incluye a Angola, el Golfo de Guinea produce 5 millones de barriles, de los 9 del total de África Subsahariana.

Para abordar la situación en el Delta del Níger ha primado siempre un enfoque basado en la seguridad a ultranza, tanto por parte del Estado Federal como de la comunidad internacional. Desde hace años existe una *Estrategia de Seguridad del Golfo de Guinea* –en la que participan Nigeria, EEUU y varios países de la UE– concentrada en la lucha contra los saqueos de petróleo, el tráfico de armas o el blanqueo de fondos. A falta de una estrategia multidimensional que aborde directamente la raíz y causas fundamentales de la referida inestabilidad, no hay expectativas de mejora. De hecho, con el paso del tiempo las acciones criminales se han extendido y el radio de acción afecta actualmente a las costas de Camerún, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Puerto Príncipe, Benín y Togo.



4. ¿Cómo se explotan los minerales e hidrocarburos y a quién benefician?

El punto de partida en el que es preciso ubicarse para abordar el análisis de esta cuestión es el lugar de la extracción de los recursos. Los marcos jurídicos aplicables en cada caso y los medios que son precisos para explorarlos y extraerlos son el primer aspecto a tener en cuenta.

La soberanía estatal, sustentada en el derecho internacional, otorga las prerrogativas correspondientes a los gobiernos en cuyos territorios se encuentran los recursos naturales para proceder a su regulación y organizar todos los aspectos de su gestión. En el caso de África Subsahariana tanto los marcos normativos estatales como regionales, consagran la titularidad de las diferentes poblaciones respecto a sus riquezas naturales⁷. Son, por tanto, los representantes de los estados y gobiernos quienes, como mandatarios de las poblaciones negocian con las empresas extractivas la exploración y explotación de los minerales e hidrocarburos. El problema es que dichas poblaciones quedan habitualmente excluidas de todos los procesos de gestión sin que además perciban una parte equitativa de los correspondientes ingresos.

Por otro lado, las características financieras y técnicas del sector extractivo limitan el número de participantes. En el caso de los minerales (salvo la minería artesanal) y, sobre todo, de los hidrocarburos, para la exploración y explotación se requiere una importante inversión económica, además de una tecnología y *know-how* que normalmente solo tiene las grandes corporaciones y multinacionales extranjeras.

Los estados ricos en hidrocarburos están en el origen de la denominada “maldición de los recursos”, que inicialmente fue analizada desde una vertiente económica⁸. La vertiente política de esta “maldición” se traduce en altos niveles de corrupción, ausencia de buen gobierno y democracia, además de indicadores de desarrollo humano bajo mínimos, enormes déficits en materia desigualdad y cohesión social, y una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales. Son numerosos los estudios que han constatado cómo la existencia de abundantes recursos naturales conlleva, en un alto porcentaje de casos, un deterioro de los indicadores referidos, tasas altas de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, sistemas de salud muy frágiles (con un alto grado de mortalidad infantil) y niveles educativos muy bajos (Karl, 2007).

A efectos explicativos, se han identificado 10 aspectos centrales que vertebran y definen el sistema de explotación y expolio de los recursos minerales e hidrocarburos.

⁷ El artículo 21.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (de 1981) señala: “Los pueblos tienen la libre disposición de sus riquezas y de sus recursos naturales. Este derecho se ejercerá en interés exclusivo de las poblaciones. En ningún caso, podrá un pueblo ser privado de este derecho”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establecen los mismos principios.

⁸ La vertiente económica de la maldición de los recursos se denomina el “mal holandés” y refleja los impactos negativos que puede tener un aumento muy significativo de las exportaciones de gas o petróleo en un determinado país: elevación de ingresos por divisas; aumento de la masa monetaria; inflación o apreciación de la moneda (con los consiguientes impactos negativos para la exportación); reorientación de los factores de capital y trabajo a la producción de bienes nacionales que no se comercializaban hasta entonces y al sector petrolero en crecimiento; disminución de la diversificación de la economía y perjuicios para otros sectores productivos y exportadores tradicionales.

1. Estados rentistas, Estados en la sombra y Estados Fallidos Sostenibles

Los estados que producen petróleo en volúmenes importantes (Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial) son denominados *Estados rentistas*. Su explotación se realiza por parte de una élite muy minoritaria de la economía nacional a modo de enclave económico (desconectado del resto de sectores), y con muy escasa diversificación económica. Dichos estados se configuran como auténticos *Estados en la sombra* (Reno, 2000). Están contruidos sobre una fachada de leyes e instituciones gubernamentales y se sustentan en buena parte en economías clandestinas que contribuyen al fortalecimiento de la autoridad pública. Sus gobernantes, interesados en que persista la ineficiencia institucional, “privatizan” el patrimonio público y desarrollan diversas estrategias con el fin de seguir alimentando a sus redes clientelares. Por otro lado, las rentas petrolíferas permiten a las élites locales fortalecer los aparatos de represión y coerción bajo su control, a través de inversiones sustanciales en armamento y dispositivos de seguridad.

Las rentas del petróleo (y de los minerales) permiten flexibilizar en gran medida (o incluso eliminar) la carga fiscal directa sobre los ciudadanos (aligerando de esta manera las presiones sociales y la necesidad de rendir cuentas) y subvencionar los alimentos básicos, lo cual no solo favorece la amortiguación de tensiones sociales sino que también benefician a las élites empresariales que controlan los sectores de producción y distribución energética y alimentaria.

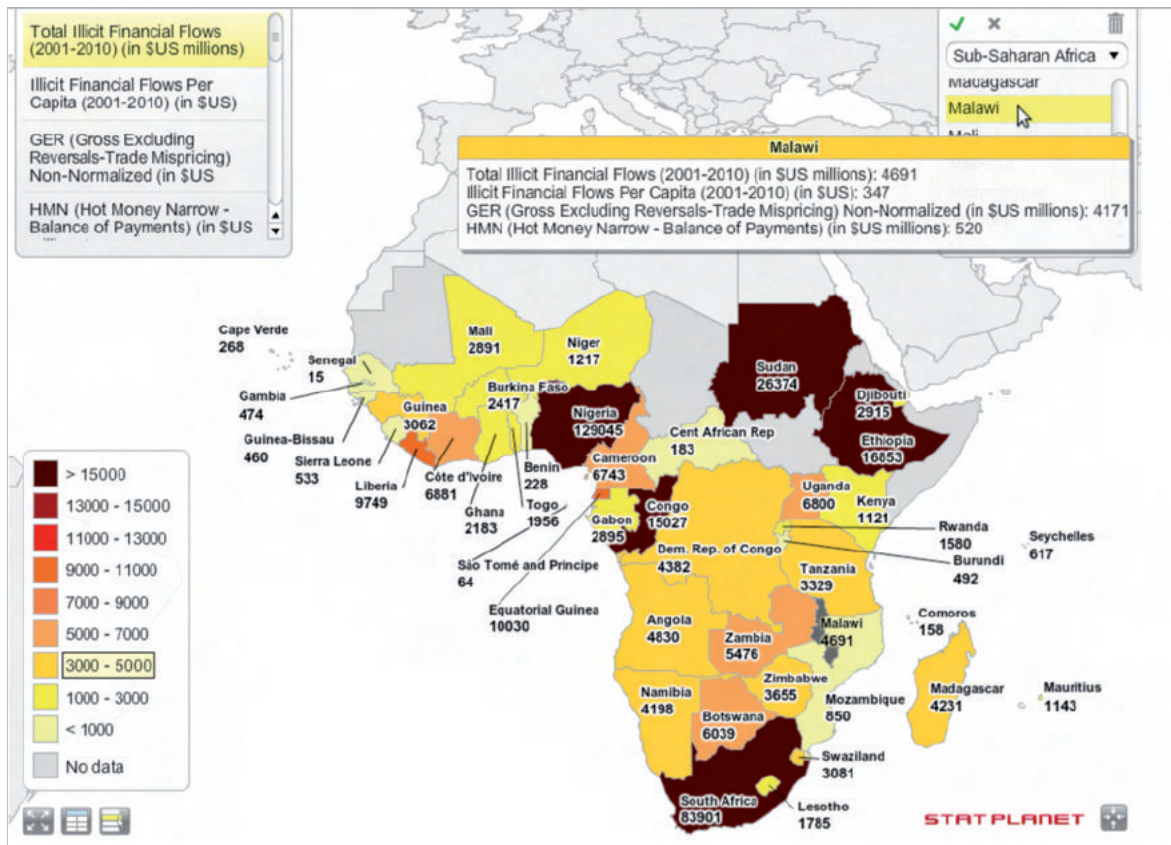
Estos regímenes exhiben, por un lado, una fortaleza considerable –acrecentada a través de la legitimación externa que recibe de los actores globales que participan en el ámbito energético, principalmente las multinacionales y gobiernos extranjeros– mientras que, por otro, marginan al conjunto de la población y demuestran una negligencia interesada en relación a la prestación de servicios sociales básicos, desarrollo socio-económico sostenible y lucha contra la pobreza. La expresión *Estados fracasados sostenibles* (Soares de Oliveira 2007) se ajusta perfectamente a su perfil. Si bien, las tensiones sociales que se viven de forma recurrente en estos países amenazan, al menos a largo plazo, su sostenibilidad.

2. Opacidad

Las élites africanas y las multinacionales extranjeras han venido negociando los acuerdos anteriormente referidos con una falta absoluta de transparencia. Los pagos que se realizan por diversos conceptos (royalties, licencias, cánones) quedan fuera del escrutinio público y sin ningún tipo de rendición de cuentas, lo que implica una pérdida para las arcas estatales incalculable.

En otras ocasiones, la opacidad se extiende a los pactos entre los estados y las grandes corporaciones. Por ejemplo, la multinacional francesa Areva explotó en régimen de monopolio el uranio nigerino desde los años 60 hasta 2007. Los acuerdos suscritos entre dicha empresa y los sucesivos gobiernos nigerinos han estado marcados por el secretismo. Diversos expertos estiman que los ingresos percibidos durante dicho período por Níger deberían haber sido se estima que mayores. En 2007 Areva aceptó que los ingresos del gobierno procedentes del uranio se incrementasen en un 50%. Ese mismo año el gobierno de Níger otorgó a Areva la licencia para la explotación de la mina de uranio de Imouraren, que será la segunda más grande del mundo. El presidente nigerino Issoufou declaró en 2013 que el país apenas recibe 100 millones de euros al año por la explotación del uranio (un 5% del presupuesto estatal), y anunció su intención de incrementar dicho importe.

Existen también déficits muy importantes sobre información presupuestaria y adopción de medidas anti-corrupción en los países petroleros africanos, así como por parte de las empresas multinacionales extranjeras y nacionales de hidrocarburos, tal y como se reseña en diversos informes de las organizaciones *Open Budget Survey*, *Revenue Watch* y *Transparency International*.



3. Paraísos fiscales

La gran mayoría de las compañías que intervienen en estos acuerdos se ubican en paraísos fiscales. La creación de las denominadas sociedades *off shore* permite encubrir la identidad de los titulares reales de las participaciones empresariales. El diseño de un entramado formado por diversas empresas del mismo grupo, domiciliadas todas ellas en paraísos fiscales diversos, es de recurso frecuente.

Desde estos paraísos fiscales las multinacionales del sector extractivo emiten facturas por servicios, bienes o derechos diversos (asistencia técnica, venta de tecnología, cánones, patentes) a las filiales del mismo grupo que operan en los países ricos en recursos naturales. Estas facturas, habitualmente de un importe muy superior al real o bien por servicios inexistentes, permiten a la empresa que explota directamente los recursos naturales generar un costo o deducción, y aminorar sus ingresos gravables, en perjuicio del fisco del país donde genera sus beneficios. Son los denominados "precios de transferencia", que son una práctica ilegal⁹.

Un estudio realizado por la organización *Global Financial Integrity*, estimó la pérdida anual del continente africano entre 2008 y 2010 a resultas de los precios de transferencia, en 38.400 millones de dólares, cifra que supera tanto al total de la Ayuda Oficial al Desarrollo recibida en dicho período (29.500) como al total de la inversión directa extranjera (32.700). Dicha entidad estima que además se evadieron otros 25.000 millones de dólares por otras vías. Otras estimaciones elevan los volúmenes objeto de malversación y evasión considerablemente.

⁹ Según la OCDE el 70% del comercio mundial se produce entre empresas del mismo grupo y, por lo tanto, es susceptible de ser objeto de prácticas ilícitas de abuso de precios de transferencia o de ser dirigido a paraísos fiscales. Otro dato significativo es que los países del G-20 junto con una serie de países europeos y los territorios bajo su control representan el 88% de la opacidad fiscal internacional.

Durante los últimos años Suiza se ha posicionado como una plaza financiera de primer orden gracias a su condición de paraíso fiscal. Actualmente es el mayor centro comercial de materias primas, por el que pasan cerca del 60% de los metales y minerales que se comercian en el mundo. Gigantes del sector como Glencore tienen su sede en este país. Esta empresa fue objeto de auditoría en 2008 por el gobierno de Zambia, país en el que tiene grandes inversiones en cobre a través de una filial participada mayoritariamente por una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes (Reino Unido), propiedad a su vez de *Glencore Finance* (con domicilio en las Islas Bermudas). Una auditoría reveló que la filial de Glencore en Zambia estaba vendiendo cantidades ingentes de cobre a la empresa matriz en Suiza a precios muy por debajo de los del mercado internacional. La empresa lo negó. Las ventas de cobre al consumidor final se realizan desde Glencore en Suiza y están sujetas a una tributación muy baja.

En algunos casos, el recurso a los paraísos fiscales se extiende a las empresas estatales, como el consorcio formado por la empresa pública angoleña Sonangol con una empresa estatal China, vía una sociedad en Hong-Kong, que presumiblemente estableció un acuerdo con la junta militar de Guinea Conakry en relación a una buena parte de sus minerales, por un valor de 7.000 millones de dólares en 2009 (*Africa Confidencial*). La banca internacional, que cuenta igualmente con filiales en paraísos fiscales, ha venido desempeñando también un papel decisivo, tanto a la hora de acoger la evasión masiva de divisas procedente de estos países, como a través del otorgamiento de créditos a gobiernos autócratas o consorcios empresariales absolutamente opacos.

4. Corrupción

El acceso a las rentas por parte de las élites se realiza con carácter de monopolio. Las operaciones de malversación de fondos, especialmente en los estados petroleros están concentradas al más alto nivel.

En Uganda, donde el petróleo está bajo el control directo del presidente Museveni, la fase de exploración del petróleo ha estado marcada por acusaciones por diversos pagos, uno de ellos realizado por una multinacional domiciliada en Reino Unido y vinculado a la campaña presidencial durante las últimas elecciones legislativas. Este apoyo de multinacionales del sector extractivo a determinados candidatos políticos se ha producido también en otros países. El Banco Mundial estima que las élites africanas tienen más del 40% de su riqueza fuera del continente¹⁰. Uno de los casos más conocidos es el proceso abierto en Francia contra el ex presidente gabonés (ya fallecido) Omar Bongo, y los actuales jefes de Estado de Congo Brazaville (Nguesso) y de Guinea Ecuatorial (Obiang; incluyendo a su hijo Teodoro), a resultas de los numerosos activos y propiedades inmobiliarias de lujo que tienen en dicho país.

La corrupción es también rampante en el resto de estados petroleros. Chad (que está entre los países con indicadores más altos del mundo en mortalidad infantil) ha generado a través del petróleo unos 10.000 millones de dólares desde 2003. Sudán mantiene un contencioso por el petróleo con la actual República de Sudán del Sur, la cual (con dos tercios de los yacimientos en su territorio), cerró la producción de los pozos de petróleo (para la exportación del cual depende del oleoducto ubicado en el territorio de la República de Sudán) durante casi todo el año 2012, provocando una caída drástica de los indicadores de desarrollo humano. Chad, Sudán y Sudán del Sur destacan por sus altísimos niveles de corrupción¹¹.

¹⁰ C. Alden, China en África, Intermon Oxfam, Barcelona 2008.

¹¹ Chad y Sudán se encuentran entre los 11 países más corruptos del mundo, según el índice de 2012 de la organización *Transparency International*. La corrupción en torno a las rentas del petróleo en Sudán del Sur (que, hasta la interrupción del suministro referida suponían en torno al 98% de los ingresos estatales) queda reflejada en la misiva que el presidente del país remitió en mayo de 2012 a 75 altos y ex altos cargos de la administración requiriéndoles la devolución de 4.000 millones de dólares, a cambio de una amnistía (información publicada por la agencia Reuters).

5. Violación de derechos fundamentales

Los indicadores anteriores suelen coincidir con los relativos a libertades y derechos fundamentales de estos países reflejando una situación generalizada de represión y violación de los derechos humanos más básicos. Es el caso de los países subsaharianos de los que España importa petróleo, como Nigeria, Angola, Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial, a los que organización *Freedom House* califica como países no libres con puntuaciones muy bajas (salvo Nigeria, considerado en el último índice como “parcialmente libre”). Es frecuente la represión de las voces críticas, como periodistas y activistas, que desvelan las actividades ilícitas relacionadas con los recursos naturales.

6. Exportaciones de materias primas sin procesar

Otro factor clave es la exportación de las materias primas sin procesar, lo que implica que las arcas de estos países ingresan una parte muy pequeña del valor potencial final. El volumen de crudo refinado localmente es ínfimo y la gran parte de los minerales se exportan sin procesamiento previo de los correspondientes metales. Las divisas resultantes se utilizan para importar mercancías y bienes alimenticios muchos de los cuales podrían ser producidos localmente. Los productos manufacturados no solo generan puestos de trabajo sino que son además menos vulnerables a la alta volatilidad de los precios de las materias primas en los mercados internacionales.

A modo de ejemplo, la RDC exporta la gran mayoría del cobalto sin procesar, aportándose su valor añadido mediante su fundición en China y otros países. Lo mismo sucede en el caso de la bauxita de Guinea que se transforma en aluminio por parte de los países importadores. Nigeria y Angola, exportan crudo e importan petróleo en forma de carburante, y productos plásticos y fertilizantes fabricados a partir del petróleo.

7. Falta de control de las empresas estatales y déficits institucionales

La referida opacidad se extiende también a las empresas estatales mineras y de hidrocarburos. La posición de estas empresas públicas es clave, debido a sus facultades para valorar los activos, conceder licencias y establecer acuerdos de producción compartida con las multinacionales del sector.

La falta de control de estas empresas deriva en una gran evasión y malversación de fondos de titularidad pública. En Nigeria, dos informes relativos a las compañías de hidrocarburos estatal han reseñado una malversación de 6.800 millones de dólares entre 2010 y 2012, vinculada a transferencias para la subvención de carburante; y una evasión de 29.000 millones de dólares debido a la articulación de precios de transferencia en el sector del gas y pagos sobre concesiones y acuerdos de producción compartida.

En RDC las empresas estatales han infravalorado considerablemente los activos mineros. Además, las privatizaciones realizadas y la venta de las acciones a multinacionales extranjeras, son una vía para generar ingresos que escapan al pago de impuestos. Un estudio realizado por el *Africa Progres Panel* sobre cinco casos entre 2010 y 2012 estima que la RDC perdió al menos 1.360 millones de dólares debido a la infravaloración de acciones societarias vendidas a compañías extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. Las pérdidas equivalen al doble de lo invertido en dicho período por RDC en salud y educación.

Otro caso significativo es el de los yacimientos de hierro de Simandou, en Guinea Conakry. En 2010 una filial del grupo Beny Steinmetz realizó un beneficio (en solo dos años, y sin haber iniciado la explotación minera) de 2.340 millones de dólares (2,4 veces el PIB de dicho país),

mediante la venta de sus participaciones a la multinacional brasileña Vale. En muchos países, las ganancias de capital de este tipo de operaciones están además exentas del pago de impuestos durante los primeros años.

El *Resource Governance Index* –índice de referencia sobre la calidad de la gobernanza institucional– sitúa a países como Camerún, RDC, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Zimbabwe en los últimos puestos de su clasificación. Muchas empresas del sector se aprovechan de estos déficits para incumplir o devaluar sus obligaciones fiscales.

8. Impactos negativos de los acuerdos comerciales y marcos normativos excesivamente favorables a la inversión extranjera

Las políticas de las IFI y determinados acuerdos internacionales en materia comercial no han generado los efectos positivos previstos. A partir de los 80, el BM condicionó a la gran mayoría de los gobiernos africanos ricos en minerales para que estableciesen códigos mineros favorables a los inversores extranjeros, en una etapa en la que los precios de las materias primas estaban a la baja. Las privatizaciones de compañías estatales fueron numerosas y se impuso una gran flexibilidad laboral, además de suprimir los requisitos que existían para contratar a empresas locales.

Esta política ha tenido grandes implicaciones negativas fiscales, sociales y medioambientales. Por un lado ha permitido la entrada de capital e inversiones muy significativas y, por otro, ha contribuido a suprimir o devaluar la participación del estado en el sector minero y sus prerrogativas de negociación y regulación, así como el papel que este debe desempeñar en la prestación de determinados servicios públicos a favor de las comunidades locales.

Entre 1990 y 2000 una treintena de países africanos modificaron sus códigos mineros, siguiendo con el mismo enfoque neoliberal pero reconociendo la necesidad de establecer determinadas regulaciones sociales y medio ambientales, y con el fin de aumentar ligeramente la contribución del la producción mineral al PIB, a través de mayores gravámenes a las empresas del sector.

Pese a que muchos expertos insisten en que la adopción de marcos menos favorables a los inversores y más equitativos no tienen por qué disuadir a los primeros ni restar competitividad a los países africanos, éstos continúan manteniendo importantes deducciones y exenciones fiscales; independientemente de los beneficios de las multinacionales y del incremento exponencial de los precios de los recursos naturales.

Los casos de Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry y Zambia son ilustrativos. Liberia, continúa otorgando amplias concesiones fiscales en el sector del hierro, incluso contraviniendo el propio Código Nacional sobre Ingresos. Lo mismo sucede en Sierra Leona, a través de exenciones fiscales a las exportaciones mineras y en el Impuesto de Sociedades. En Guinea Conakry las exportaciones de minerales en 2011 ascendieron a 1.400 millones de dólares, si bien los ingresos estatales fueron de un 0,4% sobre dicha cifra. En Zambia, sus exportaciones de cobre en 2011 sumaron 10.000 millones de dólares, mientras que los ingresos del gobierno ascendieron solo a 240. Este país no moderó las concesiones fiscales hasta 2013, muchos años después de que los precios del cobre estuviesen batiendo récords históricos (y mientras los mineros soportaban una carga fiscal proporcional mayor que las multinacionales del sector).

Otro ejemplo representativo es el del oro. Pese a que los precios mundiales se incrementaron exponencialmente, los países productores de oro subsaharianos mantuvieron un gravamen por exportación del 3% como media (uno de los más bajos del mundo). Los ingresos de los inversores extranjeros cuadruplicaron los de los gobiernos africanos.

Ante esta situación y el acaparamiento desmedido de rentas por parte de las multinacionales y las élites locales, existe actualmente una tendencia a la renacionalización de los recursos (Campbell, 2010). A la oleada de reformas normativas reseñada le ha seguido una nueva fase, durante los últimos años, en la cual una decena de países han ampliado la tributación de las compañías privadas y la protección de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. Es el caso de Guinea Conakry, Burkina Faso, Ghana y Sudáfrica, entre otros.

Por otro lado, los países africanos están inmersos en diversas negociaciones de acuerdos comerciales –como los Acuerdos de Partenariado Económico, propuestos por la UE– y de inversión, que implican una mayor liberalización, lo cual puede tener consecuencias dañinas para el desarrollo de sus economías nacionales (por ejemplo, en caso de que se eliminen las tarifas para la importación de productos manufacturados).

9. Competencia por los recursos y beneficios desmedidos de las multinacionales del sector

La exploración de crudo en aguas profundas sigue dominada por las empresas occidentales, si bien China ha ido ampliando su participación en el sector de los hidrocarburos en países como Nigeria, Chad y otros. Otras multinacionales de países emergentes, como India y Brasil, ha acrecentado también su presencia en la región subsahariana. Como se ha señalado, la competencia actualmente es muy intensa entre las empresas del sector mineral y de hidrocarburos. La capacidad de las empresas chinas estatales para conseguir licitaciones a través de precios a la baja (con la ventaja de que no tienen accionistas a quienes rendir cuentas, y que se rigen por otros parámetros estratégicos de posicionamiento en la región) ha suscitado enfrentamientos y críticas por parte de numerosas empresas occidentales.

Las multinacionales generan enormes beneficios. Muchas de las principales empresas del mundo por volumen de facturación son petroleras. La comparativa entre los ingresos de algunas de estas empresas y el PIB de algunos países africanos ricos en petróleo es también paradigmática. Así, el PIB en 2012 de un país como Nigeria cifrado en 244.000 millones de dólares palidece al lado de los ingresos declarados de la petrolera Shell ese mismo año (467.200).

Una de las mayores empresas mineras del mundo, la mencionada Glencore (fusionada a finales de 2012 con otro gigante del sector, Xstrata) presentó unos ingresos en 2012 de 214.400 millones de dólares. A modo ilustrativo, el PIB anual de Zambia es de 19.200 millones y el de RDC 15.700, dos países en los que está implantada dicha multinacional y en los que, como se ha señalado, opera apoyándose en paraísos fiscales. Glencore tiene además amplios intereses en diversos mercados de materias primas y recursos agrícolas.

10. Profunda incoherencia de las estrategias de seguridad energética con los objetivos de la cooperación al desarrollo internacional

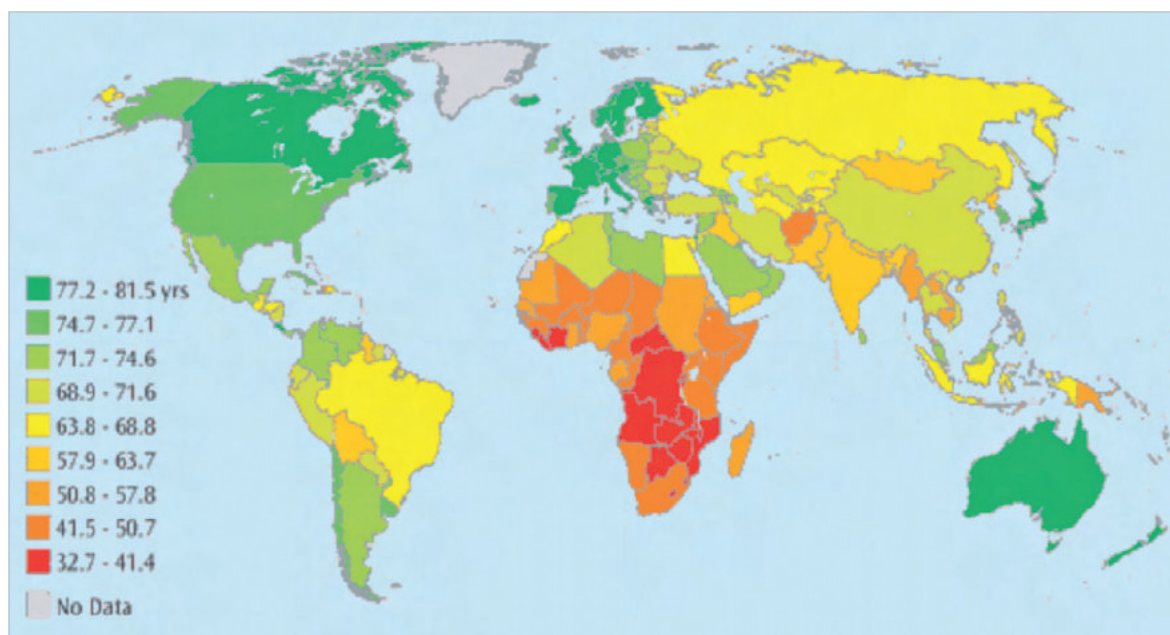
Los enfoques de seguridad energética de EEUU, la UE, China y otros países emergentes son absolutamente contradictorios con los objetivos prioritarios de la cooperación al desarrollo. El referido vínculo entre desarrollo y seguridad –al que se añaden las dimensiones de lucha contra el cambio climático y de seguridad energética– se incorporó en 2008 al Partenariado Estratégico entre la UE y África. Este acuerdo está orientado tanto al aumento por parte de la UE de su acceso a las fuentes de energía africanas como al refuerzo del suministro energético a nivel local.

Los casos de Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial, entre muchos otros, evidencian sin embargo que la prioridad de los países europeos ha sido el suministro de gas y petróleo, y no la democracia, los derechos humanos o el bienestar de las poblaciones locales.

5. ¿Qué efectos e impactos sociales y medio ambientales están teniendo lugar?

5.1. Impactos sociales

Las dinámicas de explotación y expolio descritas están directamente relacionadas con la negligencia y deterioro en la prestación de servicios de protección social, salud, educación y agua y saneamiento, y con los ínfimos niveles de desarrollo humano de una población que en 2025 previsiblemente alcanzará los 1.200 millones de habitantes. Las mujeres y niñas son las más perjudicadas.



- **Uno de los indicadores más significativo es la tasa de mortalidad infantil.** Si bien en algunos casos, como Tanzania, Zambia y Mozambique, se han conseguido ciertos progresos (globalmente la región ha doblado el ratio de mejora, siendo el actual de 2,4%), otros como Ghana, Angola y Nigeria (todos ellos importantes productores de petróleo) no han estado a la altura de la media regional. Y países como RDC, Chad, Guinea Ecuatorial y Malí no han experimentado ninguna mejoría durante los últimos años, presentando además algunas de las tasas de mortalidad infantil más elevadas del mundo. De los 25 países del mundo con tasas más altas, 12 son países africanos ricos en recursos naturales. En contextos de crisis humanitaria recurrente –como es el caso de Níger y de otros países del Sahel– diversos factores, como se ha expuesto, contribuyen además a incrementar dichas tasas.

- **Otro indicador determinante es el de la escolarización.** Se estima que dos tercios de los niños y niñas que están sin escolarizar se encuentran precisamente en estos países (lo que a su vez representa un tercio del total mundial). Estados como los de República Centro Africana y RDC o Chad invierten menos del 3% de su presupuesto en educación, muy por debajo de los estándares que se consideran necesarios.



A través del análisis de 17 países ricos en minerales e hidrocarburos, algunos de ellos africanos, la UNESCO concluye que simplemente con recabar un volumen de impuestos por la exportación de minerales equivalente a los estándares internacionales y empleando un 20% de los fondos suplementarios obtenidos por esta vía, éstos países podrían disponer de 5.000 millones de dólares anuales (2 veces y media lo que reciben en AOD). Además, y en relación a 13 países subsaharianos productores de minerales e hidrocarburos, señala que dichos ingresos suplementarios adecuadamente asignados podrían suponer la escolarización de 10 millones de niños/as (un tercio de los que actualmente no acuden a la escuela en la región).

- **Las enormes carencias en protección social, la precariedad laboral y la explotación infantil son rasgos característicos del sector minero.**

Esta cuestión afecta a cientos de millones de personas, entre ellas los mineros artesanales, que realizan su trabajo en condiciones laborales muy precarias y en la que participan un alto porcentaje de mujeres y niños/as. Se estima que hay unos 8 millones de mineros artesanales (la mayoría en minas de oro y diamantes), a cuyo cargo hay además unas 45 millones de personas. La explotación infantil es recurrente en el sector de la minería. *Human Rights Watch* publicó en 2011 un informe sobre las minas de oro en Malí y las condiciones deplorables de menores de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años que además utilizan mercurio, altamente tóxico, para desagregar el oro de la roca.



Muchos de estos mineros representan una parte pequeña pero socialmente relevante de los referidos países productores. Su participación en términos económicos varía según los países. En el caso de República Centro Africana —que atraviesa actualmente una fase de conflicto— se estima que sus 400.000 mineros artesanales representan el 80% de las exportaciones de diamantes. En RDC el control de muchas minas está en manos de grupos armados, con la consiguiente extorsión de estos trabajadores. En otros casos, como en Zimbabwe, los mineros sufren directamente la brutal represión de las fuerzas militares, con el fin de recuperar área de explotación para proyectos controlados por las élites locales y las multinacionales.

- **La concentración de las economías nacionales en sectores extractivos que generan poco empleo —especialmente el de hidrocarburos— y la consiguiente falta de diversificación contribuye, entre otras cuestiones, a que persistan y aumenten las tasas de paro,** especialmente entre los jóvenes (que representan en torno al 70% de la población). A modo de ejemplo, la tasa oficial de Nigeria aumentó de un 15% en 2005 a un 25% en 2011 (en el caso de los jóvenes las estimaciones son del 60%), durante una período en el que los precios del crudo fueron, de media, muy elevados.
- Otro de los aspectos que las rentas de los minerales e hidrocarburos no han contribuido a paliar durante los últimos años son las **disparidades existentes en cada país a nivel regional y social, y entre el medio urbano y el rural.** En el caso de Nigeria, las expectativas de vida de los niños/as procedentes de hogares pobres son la mitad que la de aquellos cuyas familias viven acomodadamente. En Mozambique el riesgo de mortalidad infantil se incrementa en un 73% en las áreas rurales. Y en Ghana el gobierno sigue invirtiendo mayoritariamente en regiones con un mayor nivel de renta que otras más marginadas, como el norte del país, en las que el riesgo de mortalidad se triplica en relación a la capital, Accra.
- **En los países en los que todavía los minerales actúan como carburante de los conflictos armados, los impactos sobre las comunidades locales son muy graves y diversos.** Es el caso del RDC, donde el oro, el coltán, el tungsteno y el estaño —destinados a la fabricación de móviles y aparatos de alta tecnología— son controlados en buena medida por los grupos armados.. La violación de miles de mujeres por el ejército del RDC y los grupos rebeldes está vinculada de forma indisoluble a las dinámicas del conflicto y a la explotación de los minerales.

- **Diversos organismos han realizado estimaciones aproximadas del potencial de las rentas procedentes de los minerales e hidrocarburos para la mejora del desarrollo humano sostenible.** Tomando como referencia los ingresos anuales estimados para los próximos años en Guinea Conakry, Liberia y Mozambique, el FMI calcula que podría erradicarse en todos ellos la pobreza extrema. En el caso de Ghana podría rebajarse en tres cuartas partes y en el de Tanzania podría lograrse en un 50%.

El acaparamiento de las riquezas es percibido además de forma generaliza y creciente como un agravio que genera reacciones diversas. Es muy común la marginación de las comunidades o poblaciones locales, que no son consultadas con carácter previo, y de forma libre e informada. Esta consulta se sustenta en normas internacionales, cuya principal referencia es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En muchos casos han sido desplazadas, sin recibir ninguna compensación.

Los perjuicios y agravios producidos –en un contexto además de precios altos de las materias primas– conllevan la radicalización de las protestas sociales. En algunos casos, como en Níger, Chad y Darfur (Sudán) son los grupos rebeldes los que reclaman un reparto equitativo de los recursos minerales. En otros casos, como en Mauritania, Ghana y, Zambia, es la incipiente sociedad civil quien lidera dicha reivindicación, fundamentando sus reclamaciones en el acaparamiento de las élites y en los grandes beneficios de las multinacionales.

5.2. Impactos sobre la salud y el medio ambiente

La extracción de hidrocarburos va acompañada de una degradación progresiva de los ecosistemas costeros y marinos, con gravísimos impactos para la agricultura y la pesca. Antes de transportar el crudo se desagregan altísimas cantidades de agua residual contaminada. Los riesgos de derrames aumentan con las prospecciones petrolíferas a gran profundidad por parte de multinacionales europeas y de EEUU, además de los impactos medio ambientales de la explotación creciente de arenas bituminosas en varios países subsaharianos. Una vez más, la voluntad política y las deficiencias institucionales desempeñan un papel clave. El índice de la Universidad de Yale sobre capacidades institucionales de protección del medio ambiente (*Environmental Performance Index*, 2010) sitúa a seis países subsaharianos en los últimos puestos de la clasificación, y a 30 de ellos entre los 50 con peores indicadores.



La región del Delta del Níger es, probablemente, la zona del mundo con mayor devastación ecológica a causa de la quema de gas y de los vertidos de petróleo. La quema de gas –que es la forma más económica de desagregar el gas del petróleo, liberando el primero a la atmósfera– en el Delta se ha realizado durante décadas, afectando al 70% del gas, si bien las tasas actuales se han reducido hasta un 40% estimado (en 2010). Ni el gobierno ni las multinacionales han querido realizar las inversiones precisas para reconducir industrialmente el gas y evitar su quema, que supone el 13% del gas que se quema en el mundo y que ha provocado más emisiones de gas efecto invernadero que la suma del resto de fuentes de emisión contaminantes de la región subsahariana. La liberación de gas produce metano, y su quema dióxido de carbono (ambos gases causantes de un 80% del calentamiento global), además de sustancias tóxicas y carcinogénicas que producen daños importantes para la salud y enfermedades respiratorias, leucemia y muertes prematuras. La lluvia ácida provocada, causa además daños en alimentos, vegetación, aguas y ganado. Como ejemplo, en el estado de Bayelsa unas 300.000 personas viven en un radio de acción de 5.000 mil metros de distancia de algunas de las 17 estaciones de producción petrolíferas donde se quema gas en el Delta.

La tendencia en la región a la quema de gas está disminuyendo. La captura del gas está empezando a ser un objetivo estratégico de países como, además de Nigeria, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón, apoyados por el Banco Mundial a través de diversos incentivos.

En cuanto a los vertidos de petróleo, se producen sobre todo en las explotaciones en tierra (*on shore*). El caso del Delta es también muy ilustrativo. Se estima que hasta 2011 se habían vertido 13 millones de barriles de crudo (equivalentes a un vertido anual del petrolero Exxon Valdez durante los últimos 50 años); de los cuales una pequeña parte, corresponde al sabotaje de los oleoductos. La compañía anglo-holandesa Shell es la empresa que más contaminación ha causado en la zona.

El Programa sobre Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP; por sus siglas en inglés) ha realizado una valoración científica de los citados impactos medioambientales y sobre la salud de la población, sus medios de vida y los recursos hídricos, y estima que se necesita un fondo inicial de 1.000 millones de dólares para acometer una rehabilitación de la zona que duraría al menos 25 años. Este organismo, y Amnistía Internacional y una organización local, el *Centre for Environment, Human Rights and Development*, han emitido sendos informes sobre la zona habitada por 800.000 personas de la etnia Ogoni, que es la más afectada de toda la región y que alberga el tercer mayor ecosistema de manglares del mundo.

En relación a los minerales, la explotación de muchos de ellos, como el cobre y el oro, provocan la contaminación de la capa freática, tal y como se ha constatado en países como Zambia, Ghana y Malí, con graves impactos para los ecosistemas. Otro aspecto que no suele mencionarse es la gran deforestación provocada por la creación de infraestructuras y vías de transporte que requieren los proyectos mineros.

El uranio en países como Namibia o Níger ha provocado amplios impactos medio ambientales y sobre la salud, por los residuos tóxicos que genera. La producción de una tonelada de uranio conlleva 3.000 toneladas de desechos, que contienen con frecuencia altos niveles de radioactividad.

En Níger la comunidad Tuareg en la región de Agadez ha visto sus medios de vida completamente alterados a causa del uranio. Un estudio realizado por Greenpeace en colaboración con una ONG local, detectó niveles de radiación en el agua, tierras y aire claramente superiores a los estándares internacionales, además de chatarra con residuos radioactivos en los mercados locales que es utilizada por la población para fabricar sus casas.

6. Vinculaciones entre los lugares de explotación y consumo

Todas las cuestiones abordadas tienen una vinculación directa con los países occidentales; sus gobiernos, empresas y ciudadanos, así como con las potencias emergentes.

Un caso muy conocido es el que algunas ONGs internacionales han dado a conocer en los últimos años en relación al coltán procedente de la región en conflicto del este de la RDC. Se trata de un mineral imprescindible y de excepcional valor para sectores tecnológicos estratégicos, como los teléfonos móviles que se fabrican en los países desarrollados o en las potencias emergentes. Además de este caso –y otros ampliamente difundidos como los “diamantes de sangre” procedentes de países como Sierra Leona y Angola– existe un gran número de minerales y metales clave para las industrias tecnológicas (como el platino, y su utilización en los catalizadores de los automóviles) y para sectores económicos industriales fundamentales (como la bauxita, con la cual se elabora el aluminio, o el mineral del hierro).

Los hidrocarburos son, por otra parte, la matriz del sistema de desarrollo, producción y consumo del sistema económico de nuestro planeta. Este modelo, sustentado en la máxima del crecimiento económico, está siendo cada vez más criticado por sus límites evidentes y sus gravísimos impactos medio ambientales. Además, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo de la industria del petróleo se crean en EEUU y Europa, en donde se investiga, desarrolla y construye toda la tecnología –como las grandes plataformas petrolíferas o las embarcaciones petroleras–, y se contratan a los trabajadores de las empresas y sectores relacionados, directa e indirectamente, con los hidrocarburos. En los países subsaharianos los empleos generados por esta industria –intensiva en capital y tecnología– son, por el contrario, muy escasos.

Existe además una gran dependencia de las economías occidentales (y de otros países desarrollados y, cada vez más, de las potencias emergentes) y de sus consumidores respecto a la obtención y disponibilidad de las materias primas que producen los países ricos en recursos naturales a precios asequibles. La Iniciativa de la UE sobre materias primas (*Raw Material Initiative*) es el marco de referencia europeo en esta cuestión. La propia Comisión Europea (2008) señala que la importación de materias primas es determinante para el desarrollo de sectores como el de la construcción, química, maquinaria, equipamientos y aeroespacial, y estima que unos 30 millones de puestos de trabajo en los países europeos miembros de la UE, vinculados a dichos sectores, dependen de la importación de materias primas.

Dado que la UE solo produce el 3% mundial de los metales minerales, su abastecimiento de regiones como la subsahariana es de vital importancia. Esta dependencia es muy significativa respecto a minerales estratégicos como el coltán, platino, titanio o las tierras raras, que desempeñan además un papel clave en el desarrollo de tecnologías ecológicas y energéticamente eficientes. En consecuencia, la política de la UE apuesta, por un lado, por el refuerzo de la capacidad institucional de los países africanos para mejorar su gestión de los recursos naturales –a la par que

se desarrollan infraestructuras vinculadas al sector minero en estos países— mientras que, por otro, presiona para que desde estos países se exporten dichas materias sin procesar y libres de gravámenes, lo cual, como se ha señalado, va en detrimento de las economías africanas.

La dependencia energética de la UE también es alta (importa en torno al 50% de sus necesidades energéticas, con una tendencia al alza). Pese a que su política de seguridad energética incorpora la variable de la mejora de la gobernanza por parte de los países ricos en hidrocarburos es preciso una adecuada coordinación entre sus países miembros para abordar las cuestiones sustanciales relativas al impacto de la explotación y expolio de los recursos minerales.

Todas estas cuestiones están siendo abordadas de forma cada vez más firme desde diversos frentes por parte de numerosas organizaciones sociales (OSC). A modo de ejemplo, ante los referidos impactos derivados de la explotación del petróleo en el Delta del Níger (Nigeria) por parte de la multinacional Shell se han presentado diversas demandas ante los tribunales del Reino Unido y Holanda. Según Amnistía Internacional, los gobiernos en las que dichas empresas tienen su sede central deben también apoyar el proceso de rehabilitación social y medioambiental, ya que estos países —y sus consumidores y contribuyentes— se han beneficiado durante décadas de las actividades extractivas y comerciales relacionadas con el petróleo y el gas de esta región, obteniendo además el suministro energético a un precio asequible.



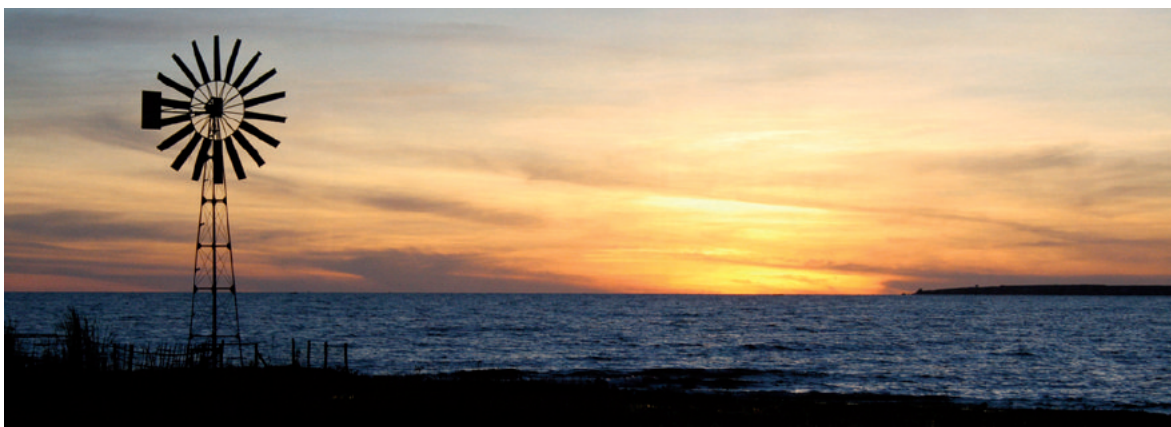
Por otra parte, son los países occidentales, con EEUU a la cabeza, los causantes de la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las poblaciones africanas sufren las consecuencias. África es la región del mundo que está siendo más afectada por el cambio climático y, sin embargo únicamente representa el 3,2% de las emisiones mundiales de CO₂ (según datos de 2009). Los impactos previsibles en África podrían traducirse en un descenso de la productividad agrícola de en torno a un 50% en 2020 y a una situación crítica en relación a los recursos hídricos que afectará, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (2011) a entre 75 y 250 millones de africanos.

Otra de las cuestiones clave es la de los mercados financieros. La especulación con las materias primas ha adquirido cotas muy altas, a través de la desregulación de los servicios financieros, la implicación de fondos de inversión, soberanos y de alto riesgo, y la creación de derivados financieros.

También existe una responsabilidad conjunta sobre los ingentes flujos financieros que han sido transferidos desde el continente africano sobre todo hacia países occidentales (y sus paraísos fiscales), así como a sus empresas y entidades bancarias, procedentes de evasiones y manipulaciones fiscales, malversación y actividades criminales. Un informe reciente del Banco Africano de Desarrollo y del centro *Global Financial Integrity* estima en hasta 1,4 trillones de dólares USA (lo que equivale a 1.4 billones en la escala numérica europea) –equivalente a todo el PIB actual de África– el volumen de fondos que entre 1980 y 2009 ha podido ser transferido ilegalmente desde el continente.

Otra gran cuestión es la de la generación, durante las últimas décadas, de grandes volúmenes de deuda, producto de una gestión corrupta y absolutamente irresponsable por parte de muchos dirigentes africanos –y la actuación también irresponsable en muchas ocasiones de las IFI y los gobiernos y entidades financieras occidentales–, que ha perjudicado enormemente a las poblaciones locales. Numerosas OSC y plataformas vienen también denunciando las injusticias generadas por esta deuda, reclamando su condonación u otras formas más equitativas de abordar esta problemática.

Todas estas cuestiones interpelan además directamente a los ciudadanos y contribuyentes de los países desarrollados, consumidores de los minerales e hidrocarburos africanos. A la luz de toda la problemática descrita, se impone, por tanto, una profunda y renovada reflexión sobre la necesidad de fortalecer las acciones de incidencia desde las OSC sobre los gobiernos y organismos públicos; reforzar el escrutinio sobre todas estas cuestiones; exigir una mayor rendición de cuentas; y, abordar de forma coherente la relación directa entre los patrones de consumo y los de producción, teniendo en cuenta que la demanda de los consumidores influye y condiciona la oferta de las empresas. Como en tantas otras cuestiones, es más urgente que nunca construir y desarrollar un nuevo paradigma que englobe todas estas dimensiones y sus implicaciones.



7. Apuntes sobre España y su presencia en África subsahariana

A partir de 2006 España inició una nueva estrategia en África Subsahariana articulada en torno a varios ejes plasmados en el primer Plan África, promovido a resultas de la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos a las costas de las Islas Canarias. Esta estrategia finalizó en el 2012, al no tener continuidad. Además, la crisis económica se ha traducido en un recorte drástico de la AOD por parte del gobierno actual –especialmente en el continente africano, dados los niveles alcanzados previamente– y en la denominada “diplomacia económica” como eje central de la política exterior española. El presupuesto para la internacionalización de las empresas en 2013 representa casi 3 veces el de la AOD (Intermon Oxfam, 2013).

Este impulso comercial e inversor a favor de las empresas ha dado como resultado un aumento de los flujos comerciales (como, por ejemplo en la región reseñada del Golfo de Guinea) y de inversión en diversos países africanos. En países como Angola, y pese al alto grado de inseguridad jurídica, la presencia de empresas españolas se ha duplicado en 3 años (pasando de unas 40 en 2010 a unas 80 en la actualidad¹²). Sudáfrica, que cuenta con una gran riqueza de minerales, acoge actualmente a unas 50 empresas españolas. En Guinea Ecuatorial existen numerosas inversiones directas españolas, si bien no están cuantificadas, tal y como reseña un informe de 2012, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en este país. Ghana es objeto de un creciente interés de las empresas españolas; pese a que la información disponible en dicha página web (con fecha de 2012) reseña únicamente 10 empresas con presencia en este país. Varias de las empresas españolas con presencia en estos países desempeñan su actividad en el sector de la energía y de la minería.

En relación a los minerales, y sobre todo los hidrocarburos, la región del Golfo de Guinea reviste una importancia especial para España en términos de diversificación del origen de los flujos energéticos. España importa en torno al 99% del petróleo y del gas que consume. Nigeria, cuyo crudo es de alta calidad, es un país del que España importa desde hace tiempo volúmenes muy considerables de gas y petróleo (en 2012 representaron, respectivamente, el 11 y el 14% de las importaciones), con una tendencia al alza (en el primer semestre del 2013 las importaciones de petróleo fueron del 12%). Otros países de la región como Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún son exportadores tradicionales de crudo hacia España. Durante el primer semestre de 2013, más de un tercio de las importaciones de crudo de España provinieron del continente africano, sobre todo de África Subsahariana (CORES, 2013). España también importa minerales de diversos países de esta región.

12 Si bien la única información disponible a través de la página web del IBEX es de 2011 y hace referencia a 20 empresas.

El sector privado y las empresas adquieren, además, tal y como se señala en el actual Plan Director de la Cooperación Española, una alta relevancia como agentes de la cooperación al desarrollo, en línea con una tendencia internacional en este ámbito, y cuya referencia más reciente es el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en 2011 en Busán, Corea del Sur.

Una vertiente importante de la AOD española es la cooperación financiera que se canaliza a través del Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE), que sustituye al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), y asume además los programas de micro finanzas del Fondo para la Concesión de Microcréditos. Todas las modalidades de cooperación financiera de este fondo deben tener como finalidad la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades sociales, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. Teniendo en cuenta todo el contexto reseñado en este informe y sus claves, el escrutinio público de las operaciones de financiación del FONPRODE, cuya canalización se puede realizar a través de intermediarios financieros, fondos de inversión, organismos multilaterales y otras instituciones, adquiere una especial relevancia.

De conformidad con todo lo expuesto, es preciso también abordar el refuerzo de las iniciativas para promover la transparencia en las industrias extractivas; los marcos regulatorios sobre las empresas y su responsabilidad social corporativa; y la problemática de los paraísos fiscales. En este sentido, la adhesión y respaldo en 2007 por parte de España a la ITIE ha perdido su impulso inicial, y lo mismo cabe decir de la labor realizada en 2009, a través de una Proposición No de Ley, por el Congreso de los Diputados para la promoción de la gobernabilidad en los países ricos en recursos naturales. Por lo que respecta a las empresas y los derechos humanos está en curso la elaboración de un Plan nacional. Un 94% de las empresas españolas del IBEX 35 tenían en 2012 presencia directa en paraísos fiscales por motivos no vinculados a su actividad principal.



8. ¿Qué medidas se están adoptando para mejorar la gestión de los recursos naturales?

Durante los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas que tratan de mejorar la gestión de los recursos naturales, y proteger a las poblaciones locales y el medio ambiente. Varias de ellas están vinculadas con la noción de un capitalismo socialmente responsable, a partir de la elaboración de códigos de cumplimiento voluntario, como la *Global Mining Initiative* (1998), liderada por un consorcio de ejecutivos de compañías mineras o, en el marco de Naciones Unidas, la *Global Compact* (2000).

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de esta organización adoptó los Principios Rectores basados en la Responsabilidad de Proteger» (como deber de los Estados), Respetar (como obligación de las empresas) y Reclamar (como derecho de los individuos); en los cuales se basan los Rectores de la Comisión Europea para las empresas de hidrocarburos aprobados recientemente. El PNUD, además de otros organismos de la ONU, presta también una atención creciente a la gestión e impactos relativos a los recursos naturales. Por su parte, la OCDE ha adoptado, entre otras medida, los Principios de Gobernanza Corporativa, los Principios Rectores para las Empresas Multinacionales.

Por parte de la sociedad civil se ha elaborado la *Initiative for Responsible Mining Assurance* y la *National Resource Charter*, con la intención de que los gobiernos adopten estrategias económicas y políticas que aseguren el máximo beneficio para las poblaciones locales. Además, los minerales vinculados a conflictos son objeto específico de diversas iniciativas relacionadas con su trazabilidad y la certificación de su origen, siendo la más conocida el Proceso de Kimberley, relativo a los diamantes.

El mundo financiero ha generado también sus propias iniciativas, como los *International Finance Corporation Performance Standards* –que consisten en una serie de requisitos sobre gestión y transmisión de información financiera y sobre derechos humanos para las empresas que quieren acceder al crédito–, y los *Equator Principles*, derivados de los anteriores y adoptados por más de 60 instituciones financieras.

A nivel regional la gran iniciativa de referencia es la *Africa Mining Vision* (2009), liderada, por primera vez por una organización regional africana, la Unión Africana (UA), bajo los auspicios también de la Comisión Económica por África de Naciones Unidas. Esta iniciativa establece un enfoque holístico, sustentado en la experiencia de las últimas décadas, y tiene como objetivo aumentar la transparencia y rendición de cuentas y crear bases sólidas para el desarrollo socio-

económico, a través, del procesamiento “in situ” de los minerales, el fomento de empresas locales, los trasvases tecnológicos y el aumento de la fiscalidad; así como reducir progresivamente la dependencia de las economías africanas de estas exportaciones.

Son también numerosas las OSC que trabajan en este ámbito, tanto en los países occidentales como africanos. Una de las referencias es *Global Witness*, que ha elaborado una *check list* para los ciudadanos (como complemento de la *Natural Resource Charter*), basada en 3 principios: la necesidad de conocer quiénes son los titulares de las empresas que licitan sobre los proyectos extractivos; la total transparencia pública de los procesos de concesión de licencias en este sector; y el establecimiento de mecanismos independientes para realizar un seguimiento de todos estos procesos y del cumplimiento de las normas.. La exigencia de transparencia ha propiciado también la creación de numerosas organizaciones, cuyo trabajo es encomiable, como *Revenue Watch* o *Tax Justice Network*.

Gran parte de los esfuerzos de los últimos años sobre la mejora de la gobernanza en el sector de hidrocarburos y minerales se han concentrado en la Iniciativa sobre la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE), creada en 2002. En la ITIE confluyen actores muy diversos (gobiernos, empresas, asociaciones industriales, sociedad civil, organismos internacionales y fondos de inversión) y su objetivo es promover la transparencia, tanto sobre los pagos efectuados por las empresas extractivas como sobre los ingresos que obtienen los estados de aquellas.

La incorporación a esta iniciativa es de carácter voluntario. De los 23 países que han conseguido la convalidación en esta iniciativa, 13 son subsaharianos (Burkina Faso, Costa de Marfil, Congo Brazaville, Ghana, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Níger, Mozambique, Tanzania, Togo y Zambia). Otros 4 países son candidatos (Camerún, Chad, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Conakry); y 4 han sido suspendidos temporalmente debido a incumplimientos diversos (RDC, Madagascar, República Centro Africana y Sierra Leona). Guinea Conakry y Gabón fueron expulsados de la ITIE.

Por el momento no hay sobre la mesa resultados tangibles atribuibles a la ITIE en términos de mejora del buen gobierno, lucha contra la corrupción o reducción de la pobreza, ni sus planteamientos de transparencia se están extendiendo a otros sectores. Esto es debido, entre otras razones, a que no se han incorporado mecanismos efectivos de rendición de cuentas, a través, por ejemplo, de los presupuestos estatales, órganos anticorrupción, auditorías independientes o comisiones parlamentarias. Tampoco existe un control sobre los mecanismos a través de los paraísos fiscales (como los denominados “precios de transferencia”) que utilizan las multinacionales del sector para computar determinados gastos y evitar el pago de impuestos. Además, la ITIE, tal y como se está aplicando en este momento, no incluye en la gran mayoría de los países (con la excepción de Liberia y Nigeria) los pagos realizados en la fase de adjudicación de licencias de exploración y producción..Tampoco incluye todos los pagos que se realizan entre las multinacionales del sector y sus proveedores o prestatarios de servicios, sean o no del mismo grupo empresarial.

Pese a ello, la ITIE, junto con otras iniciativas, ha propiciado que exista una información disponible valiosa, mitigando la opacidad reseñada, y que algunos gobiernos estén adoptando determinadas decisiones sobre transparencia, tal y como se explica más adelante. En cada uno de los países incorporados a esta iniciativa se han creado mecanismos y espacios de reflexión y debate, lo cual teniendo en cuenta el escenario que existía hace apenas diez años, es un paso importante. En el caso de Nigeria, por ejemplo, la ITIE ha contribuido a desvelar y concretar en cifras la existencia de enormes déficits institucionales. Además, la ITIE junto con OSC internacionales ha contribuido a que en muchos países la sociedad civil local refuerce sus capacidades y se implique mucho más en este ámbito.. Igualmente ha promovido un mayor debate sobre reformas legislativas y, en algunos casos, una mayor supervisión de las industrias extractivas.

La otra iniciativa internacional sobre transparencia, que precedió a la ITIE, fue la campaña *Publish What You Pay* promovida por la asociación *Global Witness* y la fundación de George Soros, el *Open Society Institute*. A diferencia de la ITIE, ésta iniciativa plantea que la declaración de los referidos pagos se imponga a los gobiernos ricos en hidrocarburos y minerales con carácter obligatorio, y ha dado lugar a una coalición de organizaciones de la sociedad civil que apoya a la ITIE y que tiene diversas contrapartes en países africanos.

Ante las lagunas descritas sobre la falta de marcos vinculantes, la aprobación de la Ley de Reforma Financiera (*Dodd-Frank Act*, 2010) en EEUU supuso un auténtico revulsivo. Esta normativa exige que las compañías mineras, petroleras y gasistas que coticen en un determinado país hagan público lo que pagan a cada uno de los gobiernos en los que operan (incluyendo los pagos por licencias de exploración y producción). Y lo hagan de forma desagregada: país por país y proyecto por proyecto, lo cual es clave para conocer la rentabilidad de cada proyecto extractivo, y si dichos pagos son más o menos acordes y equitativos. Además, la normativa incluye la obligación para las empresas mineras de declarar si tienen alguna relación comercial con los “minerales de sangre” de la RDC o sus estados vecinos. Actualmente existen muchas presiones por parte del lobby del petróleo de EEUU (compuesto por algunas empresas que forman parte de la EITI) para devaluar la *Dodd-Frank Act*.

Por parte de la UE, y en línea con la normativa de EEUU, en junio de 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aprobaron el texto de las Directivas de la UE sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, con el fin de que las empresas del sector extractivo y forestal declaren anualmente todos los pagos hechos a los gobiernos (únicamente, país por país) en aquellos casos en que dichos pagos superen los 100.000 €. La normativa se aplicará tanto a las empresas que coticen en las bolsas europeas como a las grandes compañías que no lo hagan. Se estima que la legislación de EEUU junto con la de la UE abarcará el 70% de la industria extractiva.

Por otro lado, una coalición de 59 ONG trabajan actualmente para que la Comisión Europea apruebe (previsiblemente a finales de 2013) una normativa sólida (alineada con los principios rectores de la OCDE) para obligar a las empresas europeas a la realización de controles integrales en sus cadenas de proveedores, con el fin de asegurarse que no están usando ni comercializando recursos naturales provenientes de zonas en la que éstos inciden directamente en la prolongación o agudización de los conflictos.



Otras propuestas más marginales, pero que revisten un claro interés, consisten en propugnar que no se extraiga petróleo (o amplias moratorias para la explotación del mismo), como proponen algunas asociaciones en el Delta del Níger o en el Parque Nacional de Virunga (RDC). Otra de las alternativas apuntadas consiste en distribuir directamente una parte de los ingresos del petróleo a la población local, como recomiendan algunos expertos en este ámbito (Subramanian y Shaxson, entre otros); una cuestión no exenta de debate, y que cuenta con un único precedente, el de Alaska en los años 70.

9. Lecciones aprendidas

La experiencia de diversas organizaciones públicas y privadas en relación a la forma en que se han venido explotando durante las últimas décadas los minerales e hidrocarburos, arroja las siguientes enseñanzas:

- Todas las iniciativas sobre transparencia, rendición de cuentas, e información sobre las cadenas de suministro de minerales (procedentes de zonas de conflicto), son pasos importantes en la buena dirección. No obstante, **para que generen avances efectivos en beneficio de las poblaciones locales deben ir acompañadas de normas de obligado cumplimiento.**
- Lo mismo sucede en relación a la responsabilidad social de las multinacionales. Tal y como reseña el *Center for Economic and Social Rights*– criticando en este aspecto el informe que acaba de publicar el Alto Panel encargado por el Secretario General de Naciones Unidas para la agenda post 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio–, **la experiencia de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto la necesidad de adoptar normas que obliguen a las empresas a informar sobre los impactos sociales, medio ambientales y sobre derechos humanos de sus acciones;** que haya un control por parte de expertos independientes junto con las comunidades afectadas; y que se establezcan claramente responsabilidades en caso de incumplimiento.
- **La creación de autoridades de seguimiento y control independiente, y de tribunales competentes y especializados en la lucha contra la corrupción es también fundamental.** Otra vertiente decisiva de cara al futuro es el papel que deberían jugar las jurisdicciones nacionales en países donde las multinacionales tienen su matriz, como la de EEUU (a través de la *Alien Torture Act*) que permitan procesar a las empresas extractivas por violaciones graves de derechos humanos; y el papel que deben desempeñar los tribunales de aquellos países en los que existen pruebas de malversación de los ingresos públicos procedentes de los minerales y el petróleo, como es el caso del proceso abierto en Francia contra varios jefes de estado africanos en Francia.
- Igualmente, **es preciso exigir a los estados ricos en recursos naturales que comuniquen qué personas son las auténticas titulares de las sociedades creadas en paraísos fiscales y que participan en licitaciones y contratos de exploración y explotación.** En algunos casos, dichos accionistas son los propios funcionarios de los gobiernos africanos. En casos como los de Angola, en los que la empresa estatal petrolera se dedica a la explotación del petróleo y es además la única competente para otorgar licencias, los riesgos son evidentes. Como señala Global Witness, esta exigencia debe realizarse también por parte de las IFI.
- **Es también primordial el refuerzo de las capacidades de la sociedad civil y de los movimientos sociales locales,** en un ámbito que tiene una importante complejidad técnica para procesar la información disponible y articular acciones diversas. En este sentido, OSC como *Publish What you Pay* y *Global Witness* desempeñan un papel importante. La alianza entre estas organizaciones y la sociedad civil local, con el respaldo, en su caso, de algún organismo internacional (como en el caso señalado del Delta del Níger), es también decisiva para incidir en cambios normativos y en avances sustantivos de cara al futuro.

- **La creación de fondos soberanos, de estabilización y aquellos reservados para las generaciones futuras es otro aspecto fundamental.** Además de su utilidad en términos macroeconómicos (para paliar el “mal holandés” y prevenir las fluctuaciones de los precios de las materias primas), estos fondos deben estar orientados a promover el desarrollo socio-económico y a dotar de servicios sociales básicos e infraestructuras a las poblaciones más marginadas. Su gestión debe estar a cargo de profesionales cualificados independientes, incluidos los representantes de la sociedad civil, y se deben dotar de mecanismos de control y supervisión. El modelo a seguir no es por tanto, a modo de ejemplo, un fondo como el creado por el gobierno de Chad para la asignación de rentas del petróleo a proyectos sociales, cuyos miembros son nombrados por aquel directamente.

10. Buenas prácticas

En un contexto tan complejo como el descrito es imprescindible identificar casos de buenas prácticas que vayan marcando una senda de progreso. Pese a la magnitud de los retos, existen experiencias aceptablemente exitosas en este ámbito o que al menos abren una vía para futuros avances, aunque algunas de ellas tienen todavía importantes salvedades.

- **En relación a los recursos vinculados a conflictos, el embargo en Sierra Leona de diamantes y el de madera en Liberia permitieron en su momento avanzar en el proceso de construcción de paz en ambos países.** Además, en Liberia, se adoptó después del conflicto (en 2003) una estructura de gestión económica e institucional para los recursos naturales, con apoyo y supervisión de la comunidad internacional (incluidas agencias de desarrollo y ONG); se acordó una moratoria temporal de los recursos forestales; se revisaron todos los contratos previos; y se aprobó un marco legal con el fin de conciliar comercio, protección del medio ambiente e intereses de las comunidades locales. Lejos de ser perfecto, este modelo ha tenido resultados positivos en diversos aspectos. En Sierra Leona la puesta en marcha del Proceso Kimberley en relación a los diamantes y la reforma normativa aprobada, han tenido también efectos positivos.
- **El Proceso de Kimberley se considera la iniciativa más relevante sobre trazabilidad de minerales en zonas de conflicto.** Engloba prácticamente la totalidad de la producción de diamantes mundial (76 países) y su objetivo es certificar el origen de los diamantes, excluyendo los “diamantes de sangre”. No obstante, muchos de los países miembros han impedido que la iniciativa evolucione y a día de hoy no existen garantías reales para la mayoría de los consumidores sobre el origen de los diamantes y si éstos están vinculados con conflictos o regímenes represivos, tal y como señala *Global Witness*. Esta organización abandonó el Proceso en 2011 en protesta por la autorización a favor de la exportación de diamantes procedentes de una zona de Zimbabwe en la que las fuerzas militares perpetraron una masacre contra los mineros.
- En el caso de los diamantes de Botswana existe por el contrario unanimidad a la hora de presentarlo como la única excepción de África Subsahariana relativa a la “maldición de los recursos naturales”. En materia de hidrocarburos, el caso de Ghana, que se analiza más adelante, podría también configurarse con el tiempo como un ejemplo de buenas prácticas.

Botswana y los diamantes

La confluencia de líderes políticos responsables y con una visión a largo plazo, junto con un marco institucional sólido y una buena gestión macroeconómica son las principales claves del éxito de Botswana. Existe además un fondo de estabilización económica, orientado también a las futuras generaciones (el *Pula Fund*). Las autoridades tradicionales han desempeñado también un papel positivo en relación a la gestión de los diamantes.

Cuando, después de más de tres décadas, expiró en 2005 el contrato entre el gobierno y el gigante del sector, la empresa De Beers, se estableció una sociedad conjunta entre ambas partes y se acordó que al menos el 80% de los diamantes deberían ser cortados y pulidos *in situ*. De igual manera se fomentó la contratación y formación de personal local. Sumando los cánones e impuestos, un alto porcentaje de los ingresos (según algunas estimaciones, hasta el 80%) de los diamantes tienen como destino las arcas estatales, y su asignación a la mejora de vida de las poblaciones locales ha sido, pese a deficiencias importantes, una constante. Estas deficiencias se concretan en unos niveles de pobreza bastante elevados, un desempleo considerable y la persistencia de grandes desigualdades sociales entre sus 2 millones de habitantes. El país se encuentra en el puesto 119 del IDH del PNUD, por encima de la media de los países subsaharianos.

- **El impulso de la ITIE y de otras iniciativas en materia de transparencia está dando progresivamente sus frutos en diversos países.** Es el caso de Sierra Leona, cuyo gobierno en 2012 publicó una base de datos en su página web en relación a los contratos mineros, con el fin de comunicar todos los datos relativos a todo tipo de ingresos procedentes del sector extractivo (si bien este país está todavía suspendido temporalmente de la ITIE). En el caso de Guinea Conakry, un comité independiente ha publicado una relación de 60 acuerdos sobre 18 proyectos mineros, con información legible para quienes no sean expertos.



http://www.diamondfacts.org/images/media/mr_iv_loose.jpg

- En el ámbito normativo, cabe reseñar tanto la **adopción de códigos mineros más acordes con los derechos humanos y el desarrollo socio-económico por parte de algunos países** que, pese a la presión de las multinacionales extranjeras, están, aunque de forma todavía muy incipiente, consiguiendo recabar más impuestos y establecer normas acordes con los derechos de las poblaciones locales y la preservación del medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de Zambia, que ha aplicado recientemente un aumento de los gravámenes fiscales a las multinacionales del cobre. Cabe también reseñar que los códigos mineros de Guinea Conakry, Ghana y Zambia favorecen la subcontratación de empresas locales por parte de las multinacionales.
- **El referente normativo a nivel regional más importante, es el futuro Código Minero, pendiente de aprobación, de los países de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO).** Esta organización solicitó en 2008 el apoyo de la organización Oxfam, y ha contado con la implicación de diversas ONG locales, que actualmente critican la falta de voluntad política de algunos estados para continuar con el proceso de armonización y cumplir con los plazos previstos. En 2009 la CEDEAO aprobó una Directiva con una serie de principios rectores para armonizar diversos aspectos del sector minero (protección de las comunidades locales y medio ambiente, contratación de empresas locales, gravámenes).
- **Los ejemplos de buenas prácticas en la sociedad civil y a la movilización social son muy numerosos. En los últimos años se han ido configurando movimientos y organizaciones en la gran mayoría de los países ricos en recursos naturales que van progresivamente reforzando sus capacidades y acciones de incidencia.** Uno de estos casos es el de Tanzania, en el que la sociedad civil y los movimientos locales incidieron en la aprobación del nuevo código minero, en 2010, consiguiendo una mayor protección para los mineros y comunidades locales. La plataforma Haki Madini ha conseguido crear espacios de diálogo entre los ciudadanos y el gobierno, y reforzar la capacidad de negociación de la sociedad civil.

Además, cada vez es mayor la presencia y liderazgo de mujeres en estas organizaciones y movimientos sociales, y la incorporación de enfoques de género y cuestiones clave sobre la igualdad de acceso y gestión de los recursos.



11. Orientaciones en el caso de España

Como se ha expuesto, la gestión y expolio de los recursos naturales en África Subsahariana es un tema central que concierne a gobiernos, multinacionales y ciudadanos, especialmente de aquellos países como España con un interés directo en el desarrollo humano sostenible de las poblaciones africanas, y en el progreso y estabilidad de dicha región.

La única vía para cumplir adecuadamente con los objetivos de la política exterior española y de su cooperación al desarrollo es incorporar de forma coherente y transversal en todas las acciones, estrategias, políticas y proyectos un análisis de la problemática reseñada y las consiguientes claves. Incluso desde un enfoque limitado a la diplomacia económica, factores como el clima de la inversión y el riesgo político dependen directamente de esta cuestión.

- La promoción del buen gobierno y los derechos humanos debe ser el eje central de todas las políticas que España lleve a cabo en África Subsahariana. Para ello es preciso incorporar la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ámbito de las industrias extractivas, tanto a nivel de políticas como de instituciones, y en relación a todos los actores públicos y privados con presencia en dicha región.
- **En el plano internacional hay múltiples acciones que pueden reforzar la coherencia en este ámbito**, como, a modo de ejemplo, un mayor apoyo a la EITI y un papel de liderazgo en la lucha contra los paraísos fiscales. En el seno de la UE hay también un amplio margen para la puesta en práctica de una noción de seguridad energética sostenible que ponga en primer plano a la población africana y la creación de espacios de reflexión y acción con organismos regionales clave como la UA (que dispone de un mecanismo de revisión *inter pares*, al cual deberían incorporarse indicadores sobre la gestión de los recursos naturales). Otra vertiente relevante son los programas de cooperación al desarrollo orientados a mejorar la gestión de los RRNN, en colaboración con las instituciones y gobiernos africanos, y la sociedad civil local.
- Por otro lado, **la presencia creciente de empresas españolas en África Subsahariana requiere un seguimiento y análisis de sus inversiones, con el fin de valorar en qué medida contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico** (a través de una serie de indicadores pro desarrollo), **qué grado de responsabilidad social corporativa tienen, y cuáles son sus acciones sociales en estos países**. Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior podrían centralizar y coordinar esta tarea, así como recabar y sistematizar la información precisa, y ponerla a disposición del público a través de la página web del ICEX o de otro organismo.
- **A nivel institucional y empresarial es también fundamental el fomento de las inversiones en energías renovables en el continente africano, partiendo del alto nivel tecnológico de algunas empresas españolas en energía solar y eólica**. Lo cual requiere una estrategia conjunta de los diferentes Ministerios españoles para la promoción de este tipo de inversiones y para el desarrollo de proyectos de suministro eléctrico en beneficio de las comunidades más pobres (siempre que se corresponda con necesidades identificadas directamente por los propios beneficiarios).

- **La configuración de la empresa como actor de desarrollo clave, la conformación de las alianzas público-privadas, y toda la vertiente de cooperación financiera canalizada a través del FONPRODE requiere a su vez que se amplíen los espacios de comunicación y seguimiento** en todas estas cuestiones, y un escrutinio acorde por parte de la sociedad civil. Otras cuestiones que requieren una rendición de cuentas detallada son la venta de armas a los países africanos; y los apoyos con fondos públicos a empresas que comercian o invierten con los países africanos ricos en recursos naturales.
- **La sociedad civil española y sus OSC, junto con el conjunto de la ciudadanía, tienen ante sí evidentes retos para reforzar el trabajo en este ámbito y mejorar su capacidad de incidencia con las instituciones públicas y a través de los medios de comunicación.** La Coordinadora de ONG para el Desarrollo Estatal (CONGDE), y las diferentes coordinadoras autonómicas, son espacios adecuados para trabajar todas estas cuestiones, e incorporarlas de forma transversal en todos sus proyectos. Tanto desde España (través de la formación, y de la educación para el desarrollo, sensibilización e incidencia, tal y como está realizando actualmente la agrupación REDES) como en países subsaharianos (a través de proyectos de cooperación al desarrollo orientados al refuerzo y colaboración con las OSC locales) hay un amplio margen para realizar aportaciones en este ámbito.

12. Conclusiones

El contexto actual denota dos dimensiones que se mueven en paralelo y apenas coinciden. Por un lado, las élites locales, las multinacionales occidentales y las potencias emergentes, respaldadas en muchos casos por sus respectivos gobiernos, siguen inmersas en dinámicas que, día a día, acrecientan los impactos negativos sobre la población y las tensiones sociales. Por otro, las OSC internacionales y locales, así como diversos organismos públicos y privados intentan incidir cada vez con más fuerza para centrar las responsabilidades y generar progresos. Los primeros siguen promoviendo códigos voluntarios, mientras que los segundos trabajan para que, además, se desarrollen marcos vinculantes y normas prescriptivas, como la única vía realista para generar avances sustantivos.

La fotografía actual muestra cómo pese al importante crecimiento del PIB de muchos Estados africanos durante la última década, las desigualdades sociales no solo persisten sino que han ido en aumento, y la inmensa mayoría de los países subsaharianos ricos en minerales e hidrocarburos siguen teniendo los peores indicadores de desarrollo humano del mundo.

La forma en que se explotan los minerales e hidrocarburos refleja de forma meridiana donde se encuentran las claves para mejorar la gestión de los mismos y corregir los ingentes déficits de gobernanza. Esta cuestión adquiere una gran importancia en el contexto actual, marcado por la presencia de China y otras potencias emergentes, en competencia con otras potencias y multinacionales occidentales; por unos precios al alza en los mercados internacionales que, no obstante, dependen de la demanda de unos mercados emergentes que empiezan a mostrar signos de decaimiento; y por unas dinámicas de exploración y producción que también están batiendo récords históricos.



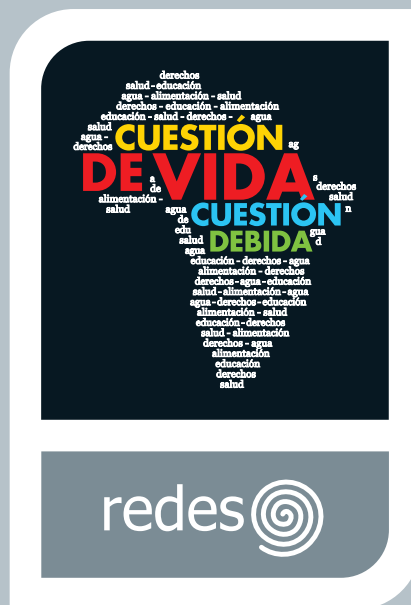
Por otro lado, siguen primando los enfoques basados en los intereses económicos (seguridad energética, inversiones empresariales) y el refuerzo de los dispositivos de seguridad. Sin que se aborde de forma coherente la gestión, expolio e impactos negativos de los recursos naturales. Factores como el cambio climático, las crisis financieras, la volatilidad del precio de los alimentos o el incremento del precio de las materias primas, que suponen un reto cada vez más importante, deberían por fin obligar a la comunidad internacional a reconocer que estos temas están inevitablemente interconectados y deben abordarse de manera conjunta (Oxfam, 2012). La gestión de los recursos naturales y sus impactos deberían incorporarse a los denominados bienes públicos globales.

Los vínculos entre los lugares de explotación y consumo exigen, además, un esfuerzo renovado para establecer nuevos paradigmas, y reforzar las acciones de incidencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos y multinacionales que se benefician de los recursos naturales africanos. Uno de los grandes retos consiste en modificar progresivamente unos patrones de consumo por parte de los países desarrollados y emergentes, que son insostenibles a largo plazo, y que tienen una relación directa con los patrones de desarrollo y producción. En el caso de España, la política y medidas relativas a su “diplomacia económica” y la presencia de sus multinacionales en la región subsahariana, debe ser coherente con todo lo expuesto. El gobierno español, las instituciones estatales, las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos tienen un amplio margen de maniobra para trabajar en este ámbito de forma consecuente con la problemática analizada.

En el otro lado de la balanza —ciertamente, descompensada— sí cabe, sin embargo, apuntar todo un proceso, relativamente reciente, de cambios positivos. La cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas van ganando cada vez más peso en la agenda internacional; hay un número creciente de OSC y ciudadanos, en todas las latitudes, que promueven cambios; la sociedad civil y los movimientos sociales africanos van adquiriendo cada vez mayor capacidad de actuación e incidencia; y van surgiendo algunas referencias ejemplares, a nivel de países (como en Ghana y, en cuestiones más puntuales, en otros), reformas legislativas e iniciativas.

Todo apunta a que en la medida en que estas buenas prácticas vayan fraguando, y que se incorporen las lecciones aprendidas reseñadas, puede haber más avances; a partir de iniciativas, locales, nacionales, regionales e internacionales. El cambio es posible, tal y como demuestran los casos de buenas prácticas reseñados, cuya existencia hubiese sido impensable hace pocos años. El gran reto está en ampliar, desde múltiples instancias, el foco de estos pequeños puntos de luz. De lo contrario, continuarán, en mayor o menor medida, las dinámicas de las últimas décadas, y cientos de millones de africanos y africanas, legítimos titulares de sus recursos naturales, seguirán siendo desposeídos de sus derechos más básicos.





ANEXOS

ESTUDIOS DE CASO

ANEXO I

Guinea Ecuatorial: el poder del petróleo

Guinea Ecuatorial fue colonizada por España entre 1885 y 1968. En el período post-independencia las diversas elecciones legislativas y presidenciales han estado marcadas por la manipulación de los resultados y el aplastamiento de la oposición. En 2011, y al calor de la primavera árabe, el presidente Obiang se apresuró a aprobar una reforma constitucional para blindar todavía más su poder y asegurar la sucesión de su hijo Teodorín. El régimen de Obiang es considerado como uno de los peores del mundo en materia de libertades y derechos fundamentales. El régimen se ampara en el derecho internacional para explotar en beneficio propio la Zona Económica Exclusiva, donde se encuentra todo el petróleo del país.

Tras una etapa en la que diversas potencias internacionales intentaron incidir en la democratización del régimen, el descubrimiento de petróleo, a mediados de los 90, cambió de raíz este escenario. EEUU, principal socio bilateral y el primero en explotar el petróleo guineano, reabrió su embajada en 2004. El presidente guineano y su clan familiar, junto con una exigua elite, controlan la petrolera estatal (una de las empresas estatales más opacas del mundo) y la empresa nacional del gas, estableciendo acuerdos y proyectos conjuntos con las multinacionales extranjeras. Ese mismo año, una investigación del Senado de EEUU descubrió hasta 60 cuentas bancarias en el Banco Riggs de Washington, cuyo titulares eran el presidente y su círculo más cercano, en las que las petroleras americanas habían ingresado un total estimado de 700 millones de dólares.

Durante los últimos 15 años Guinea —con una población de unos 740.000 habitantes— ha sido una de las economías que más ha crecido en el mundo. Entre 2000 y 2011 su PIB creció a una media del 16,9% y sus ingresos per cápita aumentaron. Pese a ello el país se sitúa en el puesto 136 del IDH del PNUD, el 75% de la población vive con menos de dos dólares diarios, su esperanza de vida apenas supera los 51 años y tiene una alta tasa de mortalidad infantil.



(145 niños y niñas menores de 5 años por cada mil; BM, 2011). En 2012 Guinea Ecuatorial produjo algo más de 300.000 barriles diarios (el tercer productor africano). El petróleo y el gas vienen representando el 85% de los ingresos estatales, el 90% aproximado del PIB y en torno al 98% de los ingresos por exportaciones. El país depende de nuevos descubrimientos para mantener la producción de petróleo más allá del 2030.

El petróleo es además una herramienta muy valiosa para el aumento de la influencia de Guinea Ecuatorial en el tablero de las relaciones internacionales y en las organizaciones regionales, como la UA (Obiang fue nombrado Presidente en 2011), y subregionales. Guinea Ecuatorial es el principal contribuyente del Banco de los Estados de África Central (BEAC). El Presidente Obiang se ha esforzado además por diversificar e intensificar sus relaciones internacionales, dentro y fuera de África.

Las multinacionales más importantes en el país son las estadounidenses Marathon Oil, Exxon-Mobil y Hess Corporation. Son también cada vez más numerosas las compañías de otros países, como Gran Bretaña (Energy Africa), Suráfrica (Sasol), Malasia (Petronas), Australia (Roc Oil), China (CNOOC y CNPC, a partir de 2006) y Rusia (Gazprom Neft). Repsol, que contaba con una licencia para explotar un bloque de petróleo, abandonó el país a finales de 2011, alegando que la inversión no era viable debido a que el canon era excesivamente alto.

La explotación del petróleo ha supuesto una mutación de amplias dimensiones a nivel económico, social y urbanístico. Por un lado, la elite se ha enriquecido exponencialmente y los ingresos del petróleo han propiciado el control de diversos sectores económicos, en los cuales la contratación de los trabajadores locales obedece a su afiliación política. Se están además construyendo numerosas infraestructuras, previa expropiación forzosa en muchos casos sin una adecuada indemnización. Existe también un proceso de acaparamiento de tierras por dicha elite, que, entre otras acciones, ha creado numerosos colegios y hospitales privados (Campos Serrano, 2013). Por otro lado, los precios han sufrido también un aumento exponencial durante los últimos años, provocando que la gran parte de la población destine sus precarios ingresos a alimentos, transporte y vivienda; los indicadores en salud y educación son muy bajos, y existen grandes carencias en el abastecimiento de agua potable y electricidad.

El petróleo ha permitido además al régimen la expansión y consolidación de diversas redes de clientelismo. Miembros del gobierno en su calidad de agentes económicos privados proporcionan a las empresas instaladas en Guinea Ecuatorial la mayor parte de los servicios locales que utilizan: suelo, seguridad o trabajadores. No es posible el establecimiento de una empresa de capital extranjero sin esta conexión personal. Esta cuestión es bien conocida por parte de las empresas españolas. Muchas de ellas se han quejado de las comisiones que han pagado a la familia del presidente y de las disputas comerciales con sus socios guineanos, que terminan en extorsiones y amenazas. La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores advierte sobre los casos de empresarios españoles y extranjeros a los que se les ha vetado su salida de Guinea Ecuatorial.

España es el primer importador y exportador a Guinea Ecuatorial de la UE, así como el tercer importador y cuarto exportador de todos los países con relaciones comerciales con el país, después de Estados Unidos y China. Y el primer donante de AOD. Las relaciones bilaterales durante los últimos años han estado marcadas por diversas visitas oficiales. En 2006 Obiang visitó España. El Congreso de los Diputados se negó a recibirle, reflejando así el malestar de una buena parte de la sociedad española por la visita. En 2009, fue el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos el que se desplazó a Guinea, junto con una importante delegación de representantes de partidos políticos, empresarios y periodistas. Posteriormente, visitó el país una delegación del Congreso de Diputados, encabezada por el Presidente de la Cámara.

Actualmente existen procedimientos judiciales abiertos en Francia, Reino Unido y España relacionados con la malversación de fondos relativos al petróleo. La Justicia francesa embargó en 2012 una propiedad y bienes de lujo del hijo de Obiang, Teodorín, emitiendo contra él una orden de arresto internacional. La organización española de derechos humanos APDHE ha interpuesto en España una demanda contra varios miembros de la familia Obiang por compra de inmuebles con dinero procedente de la corrupción, y existe otra causa abierta en un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria. Guinea Ecuatorial solicitó su adhesión a la ITIE pero fue expulsada en 2010 gracias a la presión de diversas OSC internacionales, y en contra de las presiones de las petroleras de EEUU para que el país permaneciese en dicha iniciativa.

ANEXO II

Angola: petróleo para la élite en un escenario post-conflicto

Angola adquirió su independencia en 1975. Atrás quedaba un extenso período de colonización por parte de Portugal, pero todavía faltaba por desarrollarse una cruenta guerra civil, protagonizada por el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA; apoyado por la URSS y Cuba) y la Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA; apoyada por EEUU y Sudáfrica). Los ingresos del petróleo (controlado por el MPLA) y de los diamantes (controlados por la UNITA) fueron decisivos para sostener a ambos bandos y espolear el conflicto. Con el asesinato del líder de la UNITA, Jonas Savimbi, en 2002, el conflicto llegó a su fin, con un saldo de un millón y medio de víctimas mortales y alrededor de 4 millones de desplazados internos.

A partir de entonces el MPLA tomó con firmeza las riendas del país. Los ingresos del petróleo han sido determinantes para acometer un proceso de reconstrucción nacional que, no obstante, y más de 10 años después del fin de la contienda, refleja ingentes desigualdades sociales. La elite política y empresarial se ha beneficiado de los ingresos del crudo, mientras que los indicadores de desarrollo humano (en el puesto 148 de la clasificación del PNUD) sitúan a una parte muy importante de la población –hastada por los largos años de conflicto y que básicamente aspira a vivir en paz– por debajo del umbral de la pobreza, y con una esperanza de vida al nacer de 51,5 años.

La presencia de la comunidad internacional fue por otra parte muy poco significativa durante los primeros años post-conflicto, lo que ha marcado también las relaciones posteriores entre el gobierno y determinados donantes, en beneficio de China y otras potencias emergente como Brasil. Además, el régimen angoleño ha desplegado gracias al petróleo una estrategia de diversificación en relación a sus socios tanto inversores y comerciales como políticos, lo cual ha fortalecido su posición frente al conjunto de actores internacionales. La alianza con China se ha traducido en créditos que rondan los 15.000 millones de dólares, asignados a la construcción de carreteras, viviendas e infraestructuras.

Luanda (con más de 4 millones de habitantes y cuyo centro está colapsado por el tráfico), considerada la capital más cara del mundo para los expatriados y visitantes, refleja de forma patente el tipo de transformación económica y social que está produciendo el petróleo. A modo de ejemplo, abundan los 4x4 último modelo, mientras que la mayoría de la población tiene que recurrir a un transporte colectivo de muy baja calidad. Los hoteles e inmuebles de lujo alineados



a lo largo de la costa disponen de suministro eléctrico propio, mientras que únicamente el 30% de los angoleños tienen acceso a electricidad. Un 87% de los habitantes de las urbes angoleñas viven en condiciones insalubres, según UNICEF.

En 2008 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas. El MPLA obtuvo el 81,6% de los votos, y la UNITA el 10,3%. El proceso estuvo sujeto a un estricto control por parte del MPLA y los espacios para hacer campaña por parte de los partidos minoritarios fueron muy limitados. En 2010 se aprobó una nueva constitución, reforzándose los poderes presidenciales. En las elecciones legislativas y presidenciales de 2012 el MPLA obtuvo también una amplia mayoría (73%).

La empresa Sonangol es el principal bastión del poder financiero y político de Angola, y su gestión y control está vinculado al presidente Dos Santos y a su círculo de familiares y estrechos colaboradores. Sonangol otorga las licencias del sector, regula a las otras compañías y participa como empresa productora; además de intervenir en otros sectores económicos. A través de un conjunto de tecnócratas formados en el extranjero y con un alto conocimiento de la gestión del sector petrolífero, el régimen ha generado una importante confianza en torno a gobiernos y empresas extranjeras respecto a la seguridad de los suministros.

Actualmente el petróleo supone en torno al 75% de los ingresos estatales, el 45% del PIB y el 90% de los volúmenes de exportación (si se le añaden los diamantes esta cifra se acerca al 98%). La producción ronda 1.8 millones de barriles al día, lo que le posiciona como el segundo productor africano. De dicha producción, aproximadamente el 50% se extrae del enclave norteño de Cabinda (300.000 habitantes; que supuestamente reciben el 10% de los ingresos petrolíferos), donde existe un movimiento independentista que reclama un reparto más equitativo de los ingresos del petróleo.

Las exportaciones de petróleo tienen como destino a EEUU y China (ambos con estimaciones algo superiores al 30%, si bien en el caso de China ronda actualmente el 40%), seguidos de Francia (sobre un 8%). Gran parte del petróleo que se exporta a China pasa a través del denominado China International Fund, que se caracteriza por su gran opacidad. Las principales compañías europeas presentes en Angola son la francesa Total, la británica BP y la italiana Eni/AGIP y, en menor medida la portuguesa Petrogal/Galp y la holandesas Shell. Por su parte, Repsol y Gas Natural tienen participación en un yacimiento de gas.

Los ingresos del petróleo están siendo utilizados por el régimen para financiar la economía angolana en diversos sectores y para conceder créditos a numerosos empresarios vinculados al MPLA (actuando además como herramienta de cooptación a favor de un partido político que cuenta con más de 2,5 millones de afiliados y con una presencia creciente en bastiones tradicionales de la UNITA); y para la creación de diversas empresas en diversos sectores, como el petrolífero, la banca (con importantes acuerdos de participación accionarial por parte de bancos europeos, y otros), seguros e inmobiliario. El fortalecimiento económico y financiero de la elite angolana está también favoreciendo dinámicas de apropiación de tierras.

Las denuncias sobre ingentes “agujeros” en las cuentas del estado y de la malversación de caudales públicos han sido continuas. *Global Witness* (2004) hace referencia (citando fuentes del FMI y otras) a la desaparición de 1.000 millones de dólares al año entre 1997 y 2002. Otros organismos, como el *Revenue Watch* sitúan a Angola en los últimos puestos en su clasificación sobre transparencia en materia de información relativa a las industrias extractivas. A diferencia de otros estados petrolíferos africanos, Angola no ha solicitado su adhesión a la ITIE.

A raíz de un préstamo de 1.400 millones de dólares otorgado en 2009 por el FMI al gobierno se publicaron por primera vez los estados financieros relativos a los años 2007 y 2008. Las cuentas presentadas han sido analizadas por *Global Witness* y *Osisa (Fundação Open Society Angola, 2011)* en un informe en el que se concluye que las mismas no han sido verificadas de forma independiente; no reflejan de forma fidedigna el volumen de ingresos; los datos presentados carecen de consistencia; y existen lagunas y anomalías graves sin que conste argumentación alguna al respecto por parte de Sonangol. Existe también una gran opacidad en la adjudicación de los contratos de exploración, extracción y producción.

Sonangol es una empresa con una gran expansión internacional. El consorcio formado en 2004 por China y Sonangol, cuya sede está en Hong-Kong, detenta participaciones en varios bloques de petróleo en Angola y ha invertido miles de millones de dólares en África Subsahariana, Latino América y el Sureste de Asia. En un vuelco histórico, Angola y Sonangol están realizando inversiones muy importantes en la antigua colonia, Portugal. El estado angolano detenta parte de la deuda de este último y las inversiones se extienden a sectores estratégicos. Desde 2008 Sonangol es un accionista mayoritario del mayor banco portugués privado, el *Banco Comercial Português*) y detenta posee un paquete importante de acciones de la petrolera portuguesa Galp Energía.

La crisis económica de países como Portugal ha favorecido además inversiones muy rentables. Un ejemplo es la adquisición del Banco Portugués de Negocios por parte del Banco Internacional de Crédito (BIC) de mayoría angolana, cuyos socios principales, con el 25% cada uno, son el empresario Américo Amorin (el más rico de Portugal) e Isabela dos Santos (hija del presidente angolano), por 40 millones de euros, casi una quinta parte del precio de 180 millones, fijado inicialmente en el decreto-ley de reprivatización por el gobierno portugués. Esta última, titular además de participaciones en empresas de medios de comunicación y financieras de Portugal, fue la primera mujer africana multimillonaria en incorporarse, en 20013, a la lista Forbes.

Diversos donantes y agencias de cooperación internacional para el desarrollo han abandonado el país o han disminuido su ayuda técnica y económica en los últimos años, por entender que no debía ser un destino prioritario de la ayuda. La AOD representa únicamente el 1% del PIB angolano. La Cooperación Española cerrará en 2014 su Oficina en Angola. Por otro lado, las multinacionales del sector (BP, Total, Petrobrás, Statoil, Sonangol, Exxon, Eni) dedican fondos muy importantes a proyectos de desarrollo a través de sus respectivos departamentos de Responsabilidad Social Corporativa. Estos proyectos están bajo control y subordinados al visto bueno de

Sonangol. Además, no existe coordinación alguna entre los proyectos de desarrollo ejecutados por las petroleras y las intervenciones en este ámbito por parte de los donantes internacionales (agencias, organismos, ONG).

Como han analizado diversos autores, una de las causas estructurales que conforman este tipo de regímenes autoritarios y clientelistas reside en las sólidas relaciones de la elite angoleña con la comunidad internacional, particularmente con las potencias internacionales, multinacionales del sector petrolífero y otros e instituciones financieras. A los ingentes intereses económicos petrolíferos, comerciales y empresariales en juego, se les unen los créditos multimillonarios (además de los referidos por China) concedidos al gobierno angoleño, desde 2002, por bancos occidentales y garantizados con los ingresos a futuro del petróleo. Estos intereses, fundamentalmente los relativos a la seguridad energética, desactivan de hecho cualquier acción que tenga por objetivo ejercer algún tipo de presión o criticar al régimen angoleño con el fin de promover cuestiones sensibles de transparencia, buen gobierno o desarrollo sostenible (Soares, 2007). Otra cuestión que ha sido señalada por diversos expertos es el escaso apoyo que reciben las organizaciones realmente independientes de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en ámbitos considerados "sensibles" (transparencia, derechos humanos) comparado con el que reciben las instituciones estatales y las asociaciones bajo la órbita del estado.

En 2012 el gobierno angoleño anunció la creación de un fondo soberano dotado con 5.000 millones de dólares. En junio de 2013 se presentaron sus líneas de actuación principales, que son muy amplias y difusas. Su objetivo es promover la diversificación económica; favorecer la estabilidad económica, maximizar las inversiones y potenciar el desarrollo de infraestructuras. Hay asignados 7,5 millones de dólares a proyectos de desarrollo social y servicios sociales básicos. El presidente del fondo es un hijo del presidente del país, Eduardo Dos Santos.



ANEXO III

Ghana: la esperanza de que el petróleo beneficie a la población

El caso de Ghana es, por el momento, excepcional en África Subsahariana. La nefasta experiencia de diversos países próximos, como Nigeria, Angola, Gabón o Guinea Ecuatorial y el impulso dado por la ITIE en diversos países subsaharianos, fue determinante para que la sociedad civil de Ghana activara todas las alarmas ante el descubrimiento de crudo en el país, a finales de 2007, recabando el apoyo de OSC internacionales experimentadas, y sumando diversas adhesiones por parte de algunos representantes del gobierno y funcionarios. La ITIE se inició primero en el sector minero (oro) y se extendió posteriormente al del petróleo y gas.

Con el fin de establecer unas bases de trabajo sólidas, se creó la Plataforma de la Sociedad Civil de Ghana sobre Petróleo y Gas, compuesta actualmente por 120 miembros de carácter muy plural (grupos, corporaciones profesionales, personas a título individual y comunidades de base, congregaciones religiosas, centros de investigaciones, entidades que promueven la igualdad de la mujer, sindicatos). Su principal objetivo es promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fortalecer la capacidad de incidencia de la sociedad civil, y de escrutinio sobre la gestión de los ingresos y la protección del medio ambiente. Ghana produce unos 110.000 barriles/días.

Dicha Plataforma cuenta con el apoyo de un mecanismo financiado por la Unión Europea, junto con las agencias de cooperación de Reino Unido, Dinamarca y EEUU, cuya finalidad es aumentar la capacidad de influencia de la sociedad civil y del parlamento de Ghana sobre el gobierno del país, su sector privado y las autoridades tradicionales, en relación a la gestión de los bienes públicos y a la prestación de servicios públicos.

La Plataforma ha participado e incidido en la elaboración de dos normas fundamentales sobre la gestión y explotación del petróleo (la *Petroleum Revenue Management Act* y la *Petroleum Commission Act*), aprobadas por el Parlamento de Ghana en 2011, unos meses después de que empezara a brotar el petróleo del *Jubilee Camp*, en diciembre de 2010. La primera está inspirada en las buenas prácticas de otros países, como Noruega, y establece claramente la distribución de fondos con destino al presupuesto estatal, además de un fondo para las futuras generaciones y otro de estabilización. Esta norma supera además los estándares de la ITIE, a través de la creación de un órgano independiente de regulación, que supervisa el cumplimiento de la ley, valora la gestión de los ingresos del petróleo y fomenta el debate público. Este órgano no tiene prerrogativas coercitivas, si bien está desempeñando un papel relevante.

El análisis y seguimiento de la gestión del petróleo que está realizando dicha plataforma es también considerado como ejemplar en muchos sentidos. El Ministerio de Energía ha publicado los acuerdos petrolíferos más importantes, si bien hay algunos en vigor cuyo contenido no ha sido difundido. Una de las cuestiones que destaca la plataforma es que Ghana ha perdido durante los dos últimos años unos 70 millones de dólares, debido a que no ha modificado ni armonizado su marco normativo sobre la fiscalidad de las empresas petroleras, lo cual implica sujetar a imposición operaciones que generan plusvalías muy cuantiosas por la venta de las participaciones en las empresas del sector. Una revisión reciente del régimen fiscal permitirá, en principio, aumentar sustancialmente los impuestos procedentes de las empresas mineras, que han pagado tasas muy bajas durante los últimos años. En 2013 el gobierno decidió erradicar el fenómeno de la minería artesanal ilegal por parte de trabajadores inmigrantes, sobre todo chinos.

Pese a dichos avances, una evaluación detallada de los proyectos financiados con los ingresos del petróleo arroja también algunas zonas grises, y refleja lo complicado que resulta ejecutar de forma eficiente los proyectos cuando existen déficits institucionales importantes. El *Africa Centre for Energy Policy*, con sede en Accra, la capital del país, señaló en 2013 carencias relativas a la identificación y selección de proyectos, importantes retrasos en la ejecución y la baja calidad de algunos proyectos, además los costes excesivos. Por otro lado, de los 287 millones de dólares asignados al gasto público en 2012, hasta un 18% fue destinado a departamentos administrativos (como, por ejemplo, la oficina presidencial), sin ninguna conexión con el desarrollo socioeconómico y productivo.

Todo este trabajo está permitiendo además tener un conocimiento bastante sólido de los ingresos gubernamentales procedentes del petróleo (444 millones de dólares en 2011 y 541 en 2012) y de la asignación por sectores de dichos fondos. La agenda de prioridades de estos últimos está concentrada por el momento en la modernización de la agricultura, lo cual debería tener un impacto importante en la reducción de la pobreza. La inversión estatal en agricultura durante los últimos dos años ha crecido un 451%. El desarrollo de las infraestructuras está en la agenda del gobierno, con el apoyo de una línea de crédito prometida por China de 3.000 millones de dólares, avalada por las ventas futuras de petróleo.

El procesos de implicación social e institucional expuesto está dando además resultados a varios niveles, y fomentando sinergias. En 2012 Ghana fue el país mejor valorado de África Occidental por la *Open Budget Initiative* por su transparencia presupuestaria. Ghana forma parte además de un pequeño grupo de países ricos en recursos naturales cuya dependencia de la AOD internacional es decreciente. La mejora de la gestión de los recursos naturales y de la gobernanza institucional promueve y afianza a su vez las inversiones directas extranjeras, atrayendo a empresas de diversos países, como es el caso de España.



Bibliografía

- Africa Progress Panel, *Equity in Extractives, Stewarding Africa's natural resources for all*, Africa Progress Report, 2013.
- Alden C., *China en África*, Intermon Oxfam, Barcelona, 2008.
- Campbell B., *Regulating mining in Africa, for whose benefit*, Nord Africa Institute, 2004.
- Campos-Serrano A., *Extraction off-shore, Politics inshore, and the role of the state in Equatorial Guinea*, Africa 83, 2013.
- Global Witness y Osisa, *Oil revenues in Angola. Much more information, but not enough transparency*, 2011.
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), *Le Développement en Afrique, Transformation Structurelle et Développement Durable en Afrique, Rapport*, 2012.
- Braumüller, H., Donnelly E., Vines A., Weimar M., Chatham House, *The effects of oil companies' activities on the environment, health and development in sub-saharian Africa*, Directorate-General for external policies of the Union, European Parliament, 2011.
- Global Witness, *The scramble for africa's oil, gas and minerals*, 2011.
- Hany Besada y Philip Martin, *The North South Institute (NSI), Mining Codes in Africa: Emergence of a Fourth Generation?*, 2013.
- International Crisis Group (ICG), *The Gulf of Guinea: the new danger zone*, Africa Report nº 195, 2012.
- Mbembe, A., *Necropolítica*, Ed. Melusina, 2011, pág. 99.
- Raworth, K., *Un espacio seguro y justo para la humanidad, ¿podemos vivir dentro del donut?*, Documento de debate de Oxfam, 2012.
- Scanteam, *Achievements and Strategic Options, Evaluation of the Extractive Industries Transparency Initiative. Final Report*, Oslo, 2011.
- The International Study Group Report on Africa's Mineral Regimes, *Minerals and Africa's Development*, United Nations Economic Commission for Africa, African Union, 2011.
- García-Luengos J., Campos-Serrano A., Álvarez A., Grupo de Estudios Africano, *La seguridad energética y la coherencia de políticas para el desarrollo en África Subsahariana*, financiado por la AECID, 2011.
- Intermon Oxfam, *Contra la "maldición de los recursos naturales, cómo pueden beneficiarse las personas pobres de las rentas de las extractivas*, Informe nº 134, Oxfam Internacional, 2009.
- Leke. A, et al. (2010) *"What's driving Africa Growth?" McKinsey Quarterly*, 2010.
- Varios autores, *China en África ¿Ayuda o arrasa?*, Ed. Oozebap, 2008.
- Yates D.A., *The Scramble for African Oil*, Pluto Press, 2012.

REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) es una agrupación de entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo constituida el 8 de marzo de 2003. Somos mayoritariamente ONGD ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración cristiana que deseamos trabajar juntos para ser más eficaces en nuestro compromiso con la Cooperación al Desarrollo.

REDES constituye una de las agrupaciones de ONGD de España con mayor presencia y trabajo en África Subsahariana, siendo además un área geográfica prioritaria para muchas de las entidades que la integran.

En la actualidad, trabajamos activamente en procesos de desarrollo en 36 de los 48 países de África Subsahariana.

www.africacuestiondevida.org

C/ Marqués De Mondéjar, 32 - 28028 MADRID
Tel.: 670 874 824 - Fax: 917 253 522
info@africacuestiondevida.org

Entidades que conforman REDES: Acción Marianista, Fundación Lazos de Solidaridad, Asociación Benéfico Cultural la esperanza, Acción Liberadora, AMANI, Amaranta, Fundación Amigó ONGD, AMSALA, Ayuda Solidaria, Fundación Benito Menni, Bajar a la calle sin fronteras, Buen Pastor, Asociación Calasancio, Solidaridad Compasionista, Fundación Acrescere, Fundación Concordia, Fundación Corazonistas, COVIDE-AMVE, Cruz Blanca, Dignidad y Solidaridad, ECOSOL, Entreculturas, Fundación Esteban G. Vigil, Fundación Mary Ward, FISC, Fraternidad Misionera S.C, Fundación Educativa Solidaria, FUNDEO, Haren Halde, Juan Ciudad, KARIT, KORIMA, Madreselva, Mercedarias de Bérriz, OCASHA, Misión Sin Fronteras, Fundación PROCLADE, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, PROLIBERTAS, PROYDE, Pueblos Hermanos, SAL, Instituto de Religiosas San José de Gerona, Congregación de Santo Domingo, SED, Siempre Adelante, Selvas Amazónicas, SOLIVE, Spínola Solidaria, Fundación Somasca Emiliani, Fundación Taller de Solidaridad.

Entidades que se han adherido a la Campaña: Amigos de Nyumbani, Fundación Sur, Red África Europa Fe y Justicia Antena de Madrid (AEFJN), Asociación Madre Coraje, CONFER, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), Comités de Solidaridad con África Negra de Madrid (UMOYA), MANOS UNIDAS.



redes